

**NOMENCLATURA** : 1. [40]Sentencia  
**JUZGADO** : 3º Juzgado de Letras de Punta Arenas  
**CAUSA ROL** : C-952-2020  
**CARATULADO** : PACHECO/FISCO DE CHILE - CONSEJO DE  
**DEFENSA DEL ESTADO**

Punta Arenas, diez de febrero de dos mil veintidós.

**Vistos:**

En causa de ingreso de este Tercer Juzgado Civil de Punta Arenas, Rol C-952-2020, autos caratulados "Pacheco con Fisco", el día 10 de junio de 2020, en folio 1, comparece el abogado Juan José Arcos Srdanovic, domiciliado en calle Señoret N°230 de Punta Arenas, en representación de José Luis Pacheco Cisternas, casado, chofer, domiciliado en la calle Maipú N°381 de la ciudad de Punta Arenas. Interpone demanda en juicio de Hacienda por indemnización de daños y perjuicios, derivados de responsabilidad extracontractual, en contra del Estado de Chile, representado legalmente por el Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Magallanes Claudio Patricio Benavides Castillos y/o legalmente por quién subrogue dicho cargo, ambos domiciliados en la calle 21 de Mayo N°1678 de la ciudad de Punta Arenas, o quien legalmente lo subrogue, en virtud de los antecedentes de hecho y derecho que expone. Solicita tener por interpuesta la demanda, y ordenar que se condene a la demandada a pagar las siguientes sumas: \$200.000.000 o lo que el Tribunal estime pertinente por concepto de daño moral en favor del demandante; a pagar el máximo de interés legal y reajustes a partir de la fecha del fallo y/o a la fecha que el Tribunal estime pertinente, con costas.

Explica que el siglo XX es recordado no solo por los grandes avances, sino también por grandes atrocidades que han de afectar a la humanidad, como las guerras y masacres cometidas entre Estados, y actos del Estado en contra de particulares. Es así como se generaron muertes planificadas y justificadas por ideologías diversas, e inclusive por sospecha de ideologías. Es de público conocimiento que en Chile hubo dictadura militar desde el año 1973 hasta 1990, abarcando todo el territorio nacional. Es así que los Derechos Fundamentales (DD.HH) fueron violados sistemáticamente en dicho periodo, lo que comprendió actos como torturas, ejecuciones, secuestros, confinamiento, campos de



concentración entre otros. Algunos compatriotas lograron escapar, otros resultaron exiliados, pero no todos tuvieron dicha suerte.

Refiere que se han registrado evidencias en los informes de la Comisión de Prisión Política y Tortura y la Comisión de la Verdad Y Reconciliación, que dan cuenta de la implementación de esta política del Estado de Chile, en todo el país. Y Magallanes, no es una excepción, quedando en su memoria, y en dichos informes las atrocidades cometidas por parte de funcionarios del Estado en contra de sus ciudadanos.

Indica que la comisión mencionada, logró recopilar información de cada preso político, realizando diversas consultas, interrogaciones a cada uno de los familiares, por lo que con el artículo 4 letra c del Decreto Supremo N°355, se facultó a la misma a que practicase toda diligencia e indagación para determinar la verdad. Dicho informe no debía realizar omisión alguna de los daños, por lo que se utilizó todo medio nacional e internacional existente para recopilar información necesaria.

Destaca que respecto a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país se mantienen pactos de silencio por personal de las FF.AA., lo que impide obtener el total de la información de lo ocurrido en el periodo.

Expone que su patrocinado, nacido y criado en Punta Arenas, y quien no pertenecía a grupo político alguno, fue preso político conforme explica a continuación.

Relata que su patrocinado participó el día 27 de marzo de 1984 en una de marcha por los derechos en el centro de Punta Arenas, instancia a la que acudió personal de las FF.AA., funcionarios del Estado que detuvieron de manera violenta dicho acto. Es decir, mediante amenaza de muerte, disparos, golpes, etc., todo sin provocación de los manifestantes. Durante dicho actuar, su representado temió por su vida, por lo que se quedó quieto con ambos brazos alzados, hasta que se acercó personal militar apuntándolo con un fusil a gritos solicitándole explicaciones. Instancia en la que él les explicó calmadamente que se trataba de una manifestación pacífica, que no buscaba el camino de la violencia, junto a que marchar no sería un acto ilegítimo de su parte, y que no pertenecía a partido político alguno.



Agrega que en ese contexto, se acercaron por su espalda otros funcionarios de las FF.AA., quienes lo tumbaron, y luego apuntaron su cabeza con sus armas, con objeto de que si oponía resistencia recibiría, como mínimo, un balazo. Como no opuso resistencia, le propinaron golpes hasta que perdió la conciencia. Al despertar, adolorido, se encontró junto a otros 89 manifestantes en el calabozo de la cárcel pública de Punta Arenas. Acto seguido, solicitó a los gendarmes que le permitan comunicarse con un abogado, sin embargo, sólo recibió burlas de su petición. Estuvo cerca de un día en dicha celda común, en donde apenas podía moverse, para luego ser trasladado a celdas pequeñas con dos camas, junto a otras 5 personas.

Narra que durante la privación de libertad, los gendarmes y militares se reían estruendosamente, señalando que pronto serían destinados a Isla Dawson y/o centros militares para “ablandarlos” y/o desaparecer, según su situación.

Hace presente que José estuvo un total de 22 días en dicho lugar, hasta que fue llevado por personal militar vendado y apuntándole con un fusil en su espalda a las dependencias del Fiscal Militar. Instancia en donde estuvo en todo momento presionado por cada uno de los funcionarios presentes, quienes lo apuntaban con fusiles. En dicha situación el Fiscal lo obligó a firmar documentos, sin tener la alternativa de leerlos y/u objetarlos, ni siquiera de consultar su contenido, ya que su vida estaba en juego. Acto seguido, fue llevado al centro de la ciudad, lugar en donde lo dejaron por su cuenta y con lo puesto, informando que fue procesado por maltrato de obra a personal en servicio. Situación que no ocurrió, siendo tratado como culpable de un ilícito que no cometió, y firmando documentos bajo presión ante la autoridad militar.

Alega que la estadía en la cárcel pública fue en condiciones de hacinamiento (6 personas mínimo en una celda para dos), de miedo respecto lo que podría pasar, que en cualquier momento podría ser asesinado, toda vez que era de público conocimiento las prácticas del personal armado frente a quienes políticamente eran de izquierda. No sólo lo anterior, sino que estuvo privado de alimentación razonable, ya que las porciones de comida eran insuficientes, con las luces apagadas las 24 horas, y con visitas de personal militar aleatorias para retirar prisioneros, sin certeza de que vuelvan al recinto carcelario. Hace presente las



condiciones higiénicas deficientes que se producen en presos hacinados, que destacan especialmente en el espacio reducido.

Manifiesta que en el caso de José, en varias oportunidades fue retirado del recinto, por parte de personal armado, quienes lo vendaban, apuntaban con fusil y lo acercaban a diversas partes del cuerpo, lo subían a un vehículo que daba numerosas vueltas, para luego descender en un lugar de interrogatorio. Camino al interrogatorio el personal se burlaba de él, lo insultaban, escupían y golpeaban. En la sala de interrogatorio, le quitaban la venda, instancia en donde volvían a amenazarlo con un fusil, interrogándolo no sólo sobre la marcha, sino que, por su familia, amigos, conocidos, sobre supuesta existencia de planes para desestabilizar al “gobierno”, entre otros.

Declara que su patrocinado no estaba afiliado a un partido político, y creían que él mentía, lo “ablandaban”, es decir, practicaron tortura de golpes y patadas hasta que se desmayaba y/o amenazaban con daños como cercenar, violar o desaparecer a sus familiares, como también practicaron simulacros de fusilamiento.

Expresa que su patrocinado fue liberado no sólo por la firma de los documentos bajo presión, sino que también porque no encontraron antecedentes ni declaraciones para aumentar la tortura y/o hacerlo desaparecer. Ya que no estaba afiliado ni relacionado a un partido político socialista o comunista.

Indica que tras “recuperar la libertad”, el asunto no quedó allí. Lo vivido en dicha cárcel es imborrable, lo persigue, hoy le cuesta salir tranquilo a la calle, siente que sigue bajo vigilancia. Y tiene temor de ver uniformados y de participar en marchas, ya que, de hacerlo, siente que su vida estaría en riesgo.

Agrega que se enfrentó de manera aleatoria, hasta el término de la dictadura, a allanamientos e inspecciones en su domicilio, a cualquier hora, esté o no en su hogar; con la impotencia, de que cualquier queja, podría generar daño a su persona y/ o familia. Además fue interrogado en varios allanamientos con armas apuntándolo de ser llevado nuevamente a la cárcel y/o algún centro si no cooperaba. E inclusive, en más de una oportunidad hasta el año 1990 se sintió observado, perseguido, por lo que tuvo pleno cuidado de ni siquiera opinar y/o criticar la gestión de las FF.AA..



Destaca que a su representado no le resultó fácil recordar lo vivido, ya que, por las prácticas en su contra, tiene lapsos de pérdida de memoria.

Respecto al derecho alega que se debe entender que en Chile durante la dictadura militar se implementaron violaciones sistemáticas de los DD.HH., especialmente por funcionarios de las FF.AA. y Gendarmería.

Explica que esta represión y violación de DD.HH en Magallanes se concretó por la eficaz coordinación de las FF.AA y porque, como en historia es sabido, no fue un evento improvisado, a lo largo del territorio nacional se planificó realizar el golpe de Estado; de manera que las implementaciones necesarias para aquello se realizaron tiempo suficiente antes de septiembre de 1973. Sin embargo, hay una diferencia entre Magallanes y el resto del país, que consistía en que la zona comprendía tanto al ejército, armada y fuerza aérea, la que por ser además una región estratégica, militarmente hablando, del país se puede explicar el gran número de unidades de las FF.AA. Magallanes se subordinó por una estructura única la Región Militar Austral (RMA), comandada por la V división del Ejército cuyo mando ejercía el General Manuel Torres de la Cruz desde 1971. Dicha entidad tenía actividades de inteligencia, la SIRMA, que es el Servicio de Inteligencia de la Región Militar Austral, dicho servicio funcionaba en el Antiguo Hospital Naval, conocido como "El Palacio de las Sonrisas".

Afirma que la represión en nuestro país fue progresiva, desde la implementación de patrullajes en diversos horarios, allanamientos de morada, cambios de sistema educacional, entre otros. En Magallanes el ambiente no sólo era tenso, sino que era un daño en potencia, un ex prisionero político Carlos Audicio declaró en <http://www.dawson2000.com/audicio.htm> que: "Para mí el exilio fue como estar muerto en vida. Fue sentir que te persiguen solo porque tú no piensas igual que el otro o porque tus ideales son distintos. Tenía 19 años recién cumplidos. A esa edad la vida recién comienza. Yo tenía muchas ilusiones al igual que otros muchachos. Nadie tiene derecho a cortarte tus ilusiones a esa temprana edad. El saber que eras uno de los más buscados, junto a varios compañeros más, fue terrible. Porque sabía que si te agarraban no llegabas a Punta Arenas, y que si tu familia se comunicaba con uno corría un gran riesgo. Lo que sufrieron mi padre y mi madre y mis hermanos fue terrible, yo le quite años de vida. Después caer detenido varias veces en la Argentina no podía sentirme



seguro en ningún lado. Despertarse siempre asustado. Siempre pensando que mañana vuelves a casa y ese día no llega nunca, y así todo los días sin ningún proyecto porque mañana vuelves. Y al final después vuelves y se te produce otro exilio, porque nadie te conoce, se te cierran las puertas, dejas a hijos lejos porque tú no tienes derecho a hacerle a ellos pasar por lo mismo que pasaste tú, el exilio.”

Relata que el 11 de septiembre, todas las unidades de las FF. AA cerraron la ciudad de Punta Arenas, afectando toda vía de salida de los ciudadanos, ocupando todo lugar de encuentro de partidos políticos, sedes sindicales, la UMAG, escuelas, entre otras, declarando un estado de sitio con toque de queda. Las ciudades de Porvenir, Cerro Sombrero y Manantiales en Tierra del Fuego fueron ocupadas por fuerzas militares del Regimiento Caupolicán. La ciudad de Natales en Última Esperanza fue ocupada por Regimiento Lanceros.

Refiere que en Magallanes como otras regiones hubo cacería de personas, para secuestrarlas y llevarlas a lugares clandestinos. Acorde al Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y tortura, en su página 420 señala “(...) Los presos políticos de la región estuvieron en distintos recintos de las FF.AA., los que funcionaron en su mayoría entre 1973 y 1977, tanto en la ciudad de Punta Arenas como en otras ciudades. El mayor número de detenidos se concentró durante 1973 y 1974. Quienes declararon dijeron que estuvieron detenidos en varios recintos y que eran trasladados para ser sometidos a interrogatorios, en camiones militares, aviones y barcasas. Indicaron que en todos los trayectos fueron hostigados y maltratados. Los interrogatorios estaban a cargo del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y actuaban también servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea y la Marina. Fueron utilizados como recintos de interrogatorios y torturas algunos inmuebles de las FF.AA. o de particulares habilitados especialmente para estos efectos. La casi totalidad de los prisioneros, hombres y mujeres, pasó por esos recintos durante los años 1973 y 1974.

La cárcel de Punta Arenas, el Estadio Fiscal y el campamento de prisioneros de isla Dawson fueron recintos de reclusión en los años 1973 y 1974. La cárcel fue el único recinto que mantuvo prisioneros políticos durante todo el período del régimen militar. El principal campo de prisioneros de la región se ubicó en isla Dawson, lugar de reclusión de altos dirigentes del gobierno del Presidente Salvador Allende y también de numerosos prisioneros políticos de la región, principalmente



de Punta Arenas. Otros recintos utilizados masivamente como lugar de reclusión en esta ciudad fueron el Estadio Fiscal, el Destacamento de Infantería Marina N°4 Cochrane y el Regimiento Motorizado N°10 Pudeto. Estos recintos permanecieron en funcionamiento entre 1973 y 1974 (...)."

Recuerda que el 26 de febrero de 1984 ocurrió el "puntarenazo", acto en el cual decenas de personas se manifestaron en contra del régimen militar encabezado por Augusto Pinochet. Fue la primera vez en Chile que se escuchó personalmente gritos de oposición. Este evento fue un hito que desencadenó diversas protestas, tal y como reconoce el Informe de Valech I, al señalar que "(...) a raíz de las protestas nacionales y movilizaciones sociales de oposición al régimen militar, desde el puntarenazo realizado en la Plaza de Armas de Punta Arenas en una visita del general Pinochet, se registró un alza importante de detenciones, especialmente de dirigentes políticos y sociales opositores. Ellos, luego de permanecer en recintos de Carabineros y de Investigaciones, fueron sometidos a procesos y reclusos en la cárcel de Punta Arenas (...)."

Agrega que del mismo modo acorde a la Comisión Valech I, en su informe página 426, se señala que la Cárcel de Punta Arenas fue utilizada entre los años 1973 a 1989. Y Que en el año 1984 "(...) cuando se realizaron masivas manifestaciones públicas en Punta Arenas, conocidas como el puntarenazo. Los presos políticos estaban separados del resto de la población penal. Consta de los testimonios que, en los primeros años, estuvieron en condiciones de hacinamiento en celdas pequeñas. Los declarantes también coincidieron en señalar que, en ocasiones, algunos eran sacados del recinto por personal del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) para ser sometidos a interrogatorios y torturas en otros centros de detención. Se utilizó principalmente como centro de reclusión para los prisioneros políticos condenados por consejos de guerra en Magallanes, a partir de septiembre de 1974. Las mujeres estaban separadas en la sección de mujeres de la cárcel. En la década de 1980, la mayoría de los prisioneros eran procesados que habían sido detenidos en movilizaciones masivas, en especial durante 1984. En este período los prisioneros sufrieron hostigamientos constantes de Gendarmería y a algunos los sacaban en la madrugada hasta la Fiscalía Militar para someterlos a interrogatorios y torturas, según consta de los testimonios presentados a esta Comisión. Numerosos declarantes denunciaron haber sufrido golpes dentro del





penal por parte de los gendarmes, principalmente en el año 1973, así como cuando los llevaban a otros lugares para someterlos a interrogatorio (...).”.

Acorde a lo expuesto, concluye que es un hecho cierto que hubo diversas marchas y protestas a partir del puntarenazo, por lo que se tomaron cerca de 90 detenidos hacinados en espacios reducidos tras la marcha en la que participó su patrocinado.

Hace presente que durante la dictadura los ciudadanos fueron sometidos a torturas, lo que se aplicaba según criterio de inteligencia militar, es decir, nivel de peligrosidad, jerarquía en partido, entre otros, mediante prácticas como incomunicación, aislamiento, privación de agua, comida y dormir, golpes de puños, patadas y laques durante largos periodos. Lo anterior correspondía a un nivel de intensidad, ya que el siguiente comprendía electricidad y simulacros de fusilamientos, mientras que el último, eran golpizas desnudas en las aguas del Estrecho de Magallanes, entre ramas de calafates, colgamientos en barcos, entre otros, todos con la vista vendada.

Alega que los derechos básicos de miles de chilenos fueron vulnerados durante este periodo, siendo el Estado de Chile el responsable, en todo momento y bajo cualquier gobierno, de la protección de los DDHH. Hubo diversos atentados a los Derechos Humanos, las detenciones eran variables, sin embargo, la tortura ejercida contra los presos durante su privación de libertad generó daños permanentes en lo más profundo del alma en aquellos que lograron sobrevivir. Se trató de un abuso de poder mediante métodos inhumanos por las FF.AA., órganos que debían proteger y servir al pueblo y/o nación, pero que durante el golpe de Estado fueron quienes torturaron gratuitamente a sus ciudadanos.

Destaca que desde el 12 de septiembre, gran parte de los recintos de tortura se desbordaron en cuanto a capacidad. Es por ello que, Conforme al Informe Valech I, “(...) empezaron a habilitar como centros de reclusión lugares capaces de mantener personas bajo vigilancia, como centros deportivos, centros culturales, centros de eventos, escuelas y liceos, edificios públicos, monumentos, hospitales, buques de la Armada y barcos mercantes de empresas privadas, contenedores portuarios, y dependencias de fundos, como casas patronales. En provincias, al tiempo que volvían a utilizarse antiguos campamentos de prisioneros, se construían apresuradamente otros nuevos. Tampoco se prescindió del recurso a





las cárceles, disponiéndose el ingreso a los centros penitenciarios de Gendarmería por instrucciones verbales o escritas de las fiscalías militares, cuyas órdenes fueron frecuentemente impartidas al margen de todo juicio o proceso. (...)”. Por lo que las cárceles, como la de Punta Arenas, se utilizó como centro de tortura y/o privación sin juicio ni explicación, de libertad.

Hace presente que su representado, sin que se hubiese realizado un debido proceso, estuvo privado de libertad, sometido a tortura.

Expone que entre los actos inhumanos, la tortura fue uno de los principales durante el período del Régimen militar, y no sólo en los campos de concentración, sino también en los diversos centros de detención. De tal manera que al menos en Magallanes, se practicaron los siguientes actos: a) Trabajos forzados; b) Realizar tareas sin ropa dentro y fuera de condiciones climáticas soportables; c) Aplicación de métodos de tortura con agua, chorros de agua durante largo tiempo en diversos lugares, como oídos, nariz, entre otros; d) Aislamiento; e) Hacinamiento; f) Privación de orientación, manteniendo a los mismos encapuchados por lapsos de tiempo prolongados; g) Amenazas de muerte reiteradas al prisionero y respecto de familiares; h) Golpizas con partes de diverso armamento y/o mano limpia a los prisioneros; i) Encierro en lugares estrechos; j) Hacerlos realizar tareas vendados; k) Uso de electricidad; l) Uso de animales (perros); m) Drogas para obtener información; n) Medios brutales durante el interrogatorio con objeto de que la persona perdiese el conocimiento; o) Hacer soportar al preso al mar helado del Estrecho de Magallanes; p) Simulacros de fusilamiento; q) Ser apuntado por funcionarios de las FF.AA.; r) Quemaduras en el cuerpo; s) Privación de alimentos y de líquidos; t) Restricción de uso de sanitarios.

Indica que de estos métodos, al menos en la cárcel pública de Punta Arenas, se cumple el hacinamiento, amenazas contra la integridad de su persona y familia, golpizas, ser apuntado por funcionarios de las FF.AA., desorientación, simulacros de fusilamiento, medios brutales de interrogatorio para que perdiese mi patrocinado el conocimiento, etc.

Añade que al respecto la Comisión Valech ha de ser tajante que no toda privación de libertad es tortura, es por ello que señala “(...) La prisión no es en sí misma un método de tortura. Condiciones carcelarias agravantes de la prisión, como la incomunicación, tampoco pueden ser consideradas como un método de



tortura per se, si bien implican una mayor vulneración de los derechos de la persona, aun en el caso de responder a un dictamen de la autoridad judicial competente en el marco de un debido proceso. Admitido lo anterior, debe precisarse que el confinamiento de una persona en una celda construida o ambientada con la expresa finalidad de provocar sufrimiento físico o psíquico, se considera como un método de tortura. Esta Comisión conoció numerosos testimonios referentes a confinamientos de esta índole.

Las principales características de las celdas o lugares en los cuales las personas afectadas fueron confinadas son las siguientes: 1) Confinamiento en celdas en donde se privó al detenido de todo contacto con otra persona, por un período que podía prolongarse -en algunos casos- hasta por meses, provocando afecciones psíquicas propias de la privación sensorial y social. Hay relatos de personas que fueron reclusas en celdas estrechas, sin iluminación, sin ventanas ni ningún otro sistema de ventilación y sin servicios higiénicos, forzadas por tanto a orinar y defecar en el mismo lugar, mientras se les privaba de agua y ocasionalmente, se les suministraban alimentos en estado de descomposición, si es que no se las mantenía, lisa y llanamente, en ayuno forzado; 2) Confinamiento solitario en celdas de tamaño en extremo reducido, verdaderas jaulas que no permitían permanecer de pie ni sentado, obligando a la persona afectada a soportar posiciones forzadas durante el día y la noche por períodos prolongados; 3) Confinamientos colectivos en celdas, en bodegas de barcos o en jaulas, debiendo permanecer las personas apiñadas unas sobre otras y sin lugar para hacer sus necesidades fisiológicas.

De los primeros meses de la represión política también existen testimonios referentes a situaciones de confinamiento solitario o colectivo en celdas donde había animales e insectos, tales como roedores, arañas, baratas y otros. (...).

Continúa citando el Informe Valech I, en el sentido que "(...) Las cárceles fueron recintos en los que permanecieron personas procesadas o condenadas durante todo el régimen militar, aunque en los primeros años también mantuvieron numerosos detenidos por orden de fiscales militares sin existir un proceso en su contra o bajo acusaciones vagas y arbitrarias (...). Es decir, sin proceso correspondiente, tal como ocurre en este caso, vulnerándose los derechos humanos de su parte.



Hace presente que la comisión Valech I, se ha hecho cargo de reconocer que no sólo personal de las FF.AA. ha efectuado actos vulneratorios en contra de sus ciudadanos, sino que también Gendarmería "(...) En la década de 1980, la mayoría de los prisioneros eran procesados que habían sido detenidos en movilizaciones masivas, en especial durante 1984. En este período los prisioneros sufrieron hostigamientos constantes de Gendarmería y a algunos los sacaban en la madrugada hasta la Fiscalía Militar para someterlos a interrogatorios y torturas, según consta de los testimonios presentados a esta Comisión. Numerosos declarantes denunciaron haber sufrido golpes dentro del penal por parte de los gendarmes, principalmente en el año 1973, así como cuando los llevaban a otros lugares para someterlos a interrogatorios (...)". Es decir, si bien algunos presos eran llevados a Gendarmería, estos últimos les rendían cuenta a las FF. AA, y junto a ellos torturaban a los individuos dentro de la cárcel.

Sostiene que en el presente caso, se realizaron diversos actos en contra de los presos políticos, no todos físicos, sino que psicológicos, que los han de perseguir hasta la fecha, entre las actuaciones realizadas por funcionarios amparados por el Estado de Chile, en dicha época, nos encontramos con: 1) Daños físicos; 2) Daños psicológicos: Este tipo de daño es irreparable y se debe a todo tipo de tortura que los prisioneros sufrieron durante su confinamiento, los que se pueden traducir en: a) Daño mental: como neurosis, traumas, alteraciones en la psique, inseguridad social y en su persona, desconfianza ante el Estado y otros ciudadanos, interrupciones de sueño, angustia, enfermedades psicosomáticas, problemas familiares, incapacidad de tener una vida normal, heridas en el alma, trastornos por violaciones en el caso de mujeres; b) Pérdidas de oportunidades: laborales, educación, de prestaciones sociales, de afecto; c) Separación del prisionero respecto a su familia, destrucción de la familia.

Explica que todos aquellos daños, permanecen intactos, debido a la detención indebida y tortura. No se trata de un abuso, sino de actos con conocimientos especiales, es decir, tortura especializada, ya que las FF.AA previo al golpe entrenaron a sus funcionarios en métodos para realizarla. Todo aquello tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Relata que casos ejemplares en la región que aparecen en el Informe, que acreditan la violencia de la época: a) "(...) Hombre, detenido en septiembre de



1973. Relato de su reclusión en el antiguo Hospital Naval de Punta Arenas (Palacio de las Sonrisas), a cargo del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), XII Región: Se le propinaron culatazos en los riñones al momento de subir por la escalera. Luego, cuando se le estaba interrogando, una persona que a cada rato lo insultaba fuertemente se le acercó por detrás de la silla y, seguidamente, con ambas manos al mismo tiempo, le golpeó los oídos [el llamado teléfono], provocándole la pérdida de conciencia momentánea. (Persona fallecida, relato efectuado por pariente habilitado). (...); b) "(...) Hombre, detenido en noviembre de 1973. Relato de su reclusión en el antiguo Hospital Naval de Punta Arenas (Palacio de las Sonrisas), a cargo del Ejército, XII Región: Fui llevado nuevamente vendado y amarrado de las manos a Colón 636. Me aplicaron corriente eléctrica, Cuatro días después me llevan nuevamente a interrogatorio, me colocaron en la parrilla, me amarraron las manos y los pies al catre de fierro, me aplicaron corriente eléctrica en los testículos (...); c) "(...) El 30 de octubre de 1973 fueron ejecutados en el Regimiento Caupolicán de Porvenir, Carlos Raúl BAIGORRI HERNANDEZ, de 31 años, profesor de la Escuela de esa ciudad, militante comunista; Germán Simón CARCAMO CARRASCO, 24 años, empleado de Socoagro, militante socialista; y Ramón Domingo GONZALEZ ORTEGA, 37 años, empleado del Servicio de Impuestos Internos, sin militancia conocida. Estas tres personas habían sido detenidas en forma separada en sus respectivos domicilios en fechas anteriores y luego de pasar por otros recintos, fueron conducidos al Regimiento Caupolicán de Porvenir. El 30 de octubre en la madrugada, los afectados fueron sacados del lugar en que dormían y llevados por unos suboficiales al Polígono del regimiento, donde se les hizo correr y se les disparó hasta darles muerte. Según testimonios confiables presentados ante esta Comisión, los detenidos habrían sido fusilados en el polígono a las 04:00 horas del día 30, con el objeto de efectuar una medida ejemplarizadora (...); d) José Toha González, quien falleció en 1974, fue ministro del Interior y Defensa del gobierno del presidente Allende. Detenido el mismo día del golpe militar, recluido en escuela militar y trasladado al Isla Dawson, luego por su salud al Hospital de Punta Arenas y posteriormente al Hospital Militar de Santiago. Quién murió por precarias condiciones físicas en la que se encontraba, debido a un grave estado de desnutrición. A sus familiares se le informó por el gobierno de turno que se había suicidado; e) Silvio Francisco Bettancourt



Bahamondes, militante del MAPU, el día 12 de septiembre de 1973, apareció su nombre en la nómina de personas requeridas por las autoridades. Situación por la que abandono Punta Arenas escapándose a Río Gallegos. Sin embargo, desde dicho viaje nadie supo de él. Las autoridades nunca reconocieron su detención. Sólo de acuerdo con declaraciones de testigos, varios amigos del perseguido fueron detenidos e interrogados sobre su paradero. Y mediante declaración de un ex agente de seguridad, se tuvo presente que fue interrogado y torturado; f) "Ramón González, funcionario público del SII de Punta Arenas, sin militancia política, detenido el 11 de septiembre de 1973, fue trasladado a Isla Dawson al campamento Compingim, y ejecutado el 30 de octubre de dicho año. La versión entregada a las familias a través de La Prensa Austral, era que él junto a otros detenidos con fecha 29 de octubre se habían escapado. Y que por no hacer caso a los soldados se les disparo."

En cuanto a la responsabilidad extracontractual, señala que debemos aplicar los siguientes criterios que indica.

Respecto a la responsabilidad por hecho ajeno, hace presente que no se trata sólo de un funcionario de las FF. AA que realizó los actos que vulneraron los derechos de su patrocinado, sino que el acto venía de una organización, es decir las FF. AA, bajo un sistema de escalas de mando, que incluso comprendió en el periodo a una organización ajena, como Gendarmería y Carabineros. Durante tiempos adversos en nuestro país, por conocimiento o duda de la postura política de un ciudadano, su representado fue sometido a actos inhumanos. Actos en los que se incluyen a Gendarmería, toda vez que participaron y fueron cómplices del hacinamiento y de las torturas que sufrió el demandante junto a otros manifestantes. Actos que como se han mencionado, no son atribuibles a determinadas personas, sino que al Estado. De manera que el Estado de Chile no es un ente incapaz de actuar, pues como órgano, tiene diversos subalternos con poder de representación, cuyos actos desde septiembre de 1973 deben de ser indemnizados.

Aclara que la responsabilidad civil, normalmente por el artículo 2317, permite a los demandantes dirigirse tanto contra el funcionario negligente del Estado, como contra el mismo Estado; y agrega que el requisito de hecho



voluntario se cumple, al reconducir el daño a una conducta de un sujeto, sea por acción u omisión.

Declara que en responsabilidad extracontractual no interesa saber si los funcionarios actuaron de dicha manera por circunstancias personales, sino que sólo es relevante la manera en que dichos dependientes debieron actuar en el correcto ejercicio de sus funciones. Los funcionarios de los agentes del estado, tienen desde el año 1951 un reglamento de disciplina, bajo el decreto N°1445 del Ministerio de Defensa Nacional, que en diversas disposiciones regulan su actuar intachable, sea el artículo 26, que exige vida sobria y honorable, entre otros. Al respecto cuestiona si es una vida sobria y honorable torturar a un ciudadano; y concluye que la respuesta es obvia, no podemos esperar de las FF.AA un acto que no sea la defensa del país, más no están autorizados para realizar los actos mencionados en los hechos; Inclusive, no sólo las FF.AA son culpables, sino que cada una de las organizaciones que colaboró sustancialmente con ellas, como carabineros y Gendarmería, quienes cumplieron con órdenes a costa de ciudadanos, privándoles de su calidad de persona.

Manifiesta que si bien, es cierto que bajo la organización jerárquica hubo órdenes por parte del alto mando, bajo una época en la que negarse a realizar una orden podría significar traición, y/o sufrir el mismo tipo de castigos que a los presos políticos. Pero aquello no quita que exista responsabilidad del Estado.

Recuerda que en responsabilidad extracontractual, el estándar de la culpa, implica ver qué tipo de acto hubiere hecho la misma persona bajo las mismas circunstancias. Situación en la que el Estado de Chile pudo haber tomado otro camino, sin necesidad de prisión, interrogatorio y tortura.

Respecto del vínculo de subordinación y dependencia, sostiene que ya aludió el tema, y que nos encontramos ante responsabilidad del Estado debido a sus subalternos.

Conforme a lo expuesto, concluye que nos encontramos ante vulneraciones sistemáticas de derechos humanos desde que su patrocinado estuvo privado de libertad, tortura, y hasta el término del régimen.

Razona que nos encontramos ante vulneraciones sistemáticas de derechos humanos desde que su patrocinado estuvo privado de libertad (tortura) y hasta el



término del régimen militar (por las inspecciones sorpresas con amenazas tanto en su vida privada, laboral, y/o familia).

Aclara que nuestra legislación busca la reparación del daño integral, la que según el artículo 2329 del Código Civil, no limita la aplicación del daño moral sólo a sede extracontractual o contractual, y mucho menos a leyes especiales; de igual manera, al decir toda persona, tanto las personas naturales como jurídicas deben responder por los daños, especialmente si se trata de un daño que no ha cesado pues aún existen pactos de silencio, razón por la que jamás se podrá saber qué funcionarios del Estado lo torturaron, amenazaron y persiguieron; sino que se trata del Estado de Chile, que actuó mediante sus FF.AA. y las de orden público contra todos los presos políticos. Relaciona dicho precepto con el artículo 2315 del mismo cuerpo legal, norma que persigue el mismo fin, que todo daño debe ser reparado, sea en las personas como en las cosas.

Indica que el autor nacional Pablo Rodríguez Grez define la categoría jurídica de daño moral como: "(...) la lesión de un interés extrapatrimonial, personalísimo, que forma parte de la integridad espiritual de una persona, y que se produce por efecto de la infracción o desconocimiento de un derecho cuando el acto infraccional se expande a la esfera interna de la víctima o de las personas ligadas a ella (...)". Así, el daño moral deriva de la lesión de un derecho cuando los efectos de este no sólo menoscaban los intereses jurídicamente tutelados por la norma, sino que penetran la intimidad de la víctima y de quienes forman parte de su círculo más próximo, afectando sus sentimientos, emociones, expectativas, afectos y en general, sus valores de afección.

Manifiesta que un factor que requiere especial mención, ha de ser tratado en el informe de Rettig, señalando que, entre los actos realizados por las autoridades en dicha época, hubo negación de dar explicación a la familia de la detención, tal como del lugar, permiso de visita, entregar cadáver en urna sellada (sin garantía que aquel sea el familiar), ocultar la muerte, actos de extorsión a los familiares, entre otras conductas. No pudiendo desconocer un daño moral en los familiares, quienes ante dicha época conflictiva, tuvieron la paciencia, pertinencia para defenderlos legalmente, honrarlos, e intentar contactarse con ellos.

Reitera los métodos utilizados durante los años de la dictadura militar, encontrando entre ellos: a) La Parrilla: que consiste en aplicar electricidad; b)





Colgamientos: tal como lo dice la palabra, implica hacer que una persona este en una estructura colgando de alguna extremidad, soportando todo su peso; c) Hundimientos: se sumerge la cabeza de la persona en un recipiente con alguna sustancia, hasta que esté a punto de ahogarse; d) Golpes; e) Privación de alimento y agua; f) Hacinamiento; g) Tortura psicológica: Mencionar que se secuestraron familiares, que se les haría daño, que se les fusilaría, entre otros; h) Daños con heridas de bala, armas blancas; i) Violación u amenaza de violación a los presos; j) Inyección de drogas durante la interrogación.

Expone que si bien la jurisprudencia y la doctrina se hacen cargo del daño moral y subclasificaciones, como el perjuicio estético, *pretium doloris*, de agrado, psíquico, sexual, entre otros; en el caso de marras, el daño generado no se puede limitar sólo a uno de ellos. Sino que por los métodos utilizados y la persecución que sufrió don José tras “recuperar” la libertad por las conductas de los agentes del Estado, existió un temor permanente a ser sometido a una nueva detención y/o que aquello le ocurriese a algún familiar, constituyen un daño moral arraigado en lo más profundo de su ser.

Afirma que las conductas descritas en los hechos que se demandan, son las que recuerda haber sufrido su patrocinado, ya que por este tipo de torturas tiene lagunas, por lo que es dable esperar que se aplicaron más métodos en su contra. En consecuencia los actos inhumanos alteraron el proyecto de vida de su patrocinado, de modo que durante años ha presentado sufrimiento en su vida cotidiana, angustia, crisis de pánico, pesadillas recurrentes, e incluso tiene temor de encontrarse con un uniformado. Es decir, a casi 30 años del golpe militar, no logrado superar lo ocurrido.

Acusa que por este actuar inhumano, bestial, perdió su calidad de persona y ciudadano inmediatamente. Se afectó su dignidad a tal punto, que, a estas alturas, no podría reforzarse. Sigue buscando explicación de por qué le tocó pasar por esto, sin saber qué daño o peligro representaba en ese entonces para tener que ser sometido al trato expuesto, todo por participar en una marcha pacífica. Estos actos no se correlacionan a una guerra, sino que son compatriotas autorizados por la máxima autoridad del país, quienes realizaron tortura en su contra y de otros presos políticos.



Refiere que a la fecha no tiene información de quienes lo torturaron y afectaron de igual modo a su familia al separarlo y allanar su hogar en retiradas ocasiones.

Alega que todo daño debe de ser reparado. En particular el daño moral por su naturaleza requiere que la reparación sea una indemnización que proporcione las bases para obtener goces equivalentes que compensen la pérdida, sufrimiento, dolor, aflicción, pesar. Como dice Mazeaud, dar a la víctima el medio de procurarse satisfacciones equivalentes a aquella de las que fuera privado. Pretium doloris, que pese a ser evidente, ya que figuro en las nóminas de presos políticos, es esperable y notorio por lo que tuvo que vivir, sin haberme expuesto al daño previamente. En otras palabras, debemos considerar algunos criterios para la indemnización del daño moral, que en este caso se han de cumplir, que son: a) conducta del agente: el presente criterio sirve para entender que la conducta no sólo fue negligente por parte del Estado y de sus funcionarios, sino que dolosa, ya que se evaluaba y planificaba a quién detener y torturar. A su representado lo detuvieron en la marcha junto a otros manifestantes sólo por pensar diferente; inclusive, como no lograron categorizarlo en un color político, le inventaron cargos y le hicieron firmar documentos en contra de su voluntad, para luego continuar bajo vigilancia y allanamientos sorpresa; b) Esto no fue un asunto de azar, sino que fueron actos coordinados por un sistema de inteligencia que buscaba eliminar cualquier riesgo al gobierno, aunque no fuese una figura política pública; c) Facultades económicas de las partes: En el presente caso, frente al demandado, existe una clara e indudable diferencia económica, ya que el Estado perfectamente podría indemnizar el monto solicitado. Hablamos de un ente que gasta cantidades parecidas sólo para la ciudad de Santiago en lo que respecta al transporte, o renovación de parques, etc.; d) Prudencia y equidad: este criterio implica no recibir un monto que no pueda, dentro de lo posible, solventar y apoyar al demandante tras el actuar del Estado de Chile en Punta Arenas, pero tampoco debe ser uno impagable para el mismo. De manera que la suma debe reflejar cierto límite, que se cumple en el caso de marras, ya que las vulneraciones a los DD.HH aludidas en el presente libelo, son aquellas que no son pasajeras, sino que quedan en lo más profundo de los afectados, siguiéndolos para toda la vida, dolores irreparables.



Afirma que no deben de obviarse las secuelas que dejan este tipo de actos por parte del personal del Estado, que según sus características causaron gran impacto en cada uno de los presos políticos, calidad que tiene su patrocinado, quien no fue sometido a un procedimiento justo, no recibió defensa jurídica ni apoyo alguno.

No habla de mera tortura física o psicológica, sino de efectos del golpe de Estado; es así, conforme al Informe Comisión Nacional Prisión Política y Tortura, como "(...) Al encontrarse denigrados, excluidos y acosados, muchos decidieron partir al exilio. Quienes se quedaron, debieron sobrellevar la estigmatización y la persecución en sus lugares de residencia. Algunos fueron detenidos varias veces y debieron mudarse a otras ciudades. Otros al permanecer en sus pueblos, tuvieron que convivir con sus torturadores, algunos de los cuales siguieron desempeñando funciones públicas. En estas condiciones, resultó muy arduo retornar el curso de sus vidas.(...). Continúa el Informe expresando que estas secuelas que mencionan los presos políticos son "(...) trastornos de su salud física y mental, se sumaba la perturbación de sus relaciones sociales, afectivas, sexuales, que llegó a deteriorar, a menudo, los vínculos familiares y sus parejas, lo que había causado, en muchos casos, rupturas insalvables".

Considera que la obligación de los estados, de reparar las violaciones en lo que corresponde derechos humanos, ha sido uno de los principios del derecho internacional público, al entender este tipo de indemnización como acción humanitaria. Por lo que estima el daño moral en la suma de \$200.000.000.

Afirma que las normas de derecho interno deben aplicarse de tal modo que no se contradigan con el derecho internacional, lo que se analiza al tratar las normas de la Constitución Política de la República. Hace presente que los hechos demandados implican la infracción de Chile a diversos tratados, por lo que corresponde conforme a derecho brindar una justa indemnización de perjuicios ante los Tribunales de Justicia de Chile a su patrocinado.

Explica que los tratados que fijan la indemnización y que, por ende, reconocen conductas de lesa humanidad y el modo de interpretar las normas son: El estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; la Convención sobre el Derecho de los Tratados en Viena y su Anexo; Convenio de Ginebra; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



En cuanto al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por Chile el 06 de Julio de 2009, correspondiente al Decreto 104 de dicho año del Ministerio de Relaciones exteriores. En el preámbulo de dicho tratado se señala "(...) Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad.

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia, decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes (...)". Dicho de otro modo, un delito de lesa humanidad no debe quedar sin castigo.

Indica y transcribe que el artículo 7 de dicho cuerpo normativo, norma que define crimen de lesa humanidad, y concluye que varias de las causales mencionadas en dicha norma ocurrieron en Chile desde el año 1973; por lo que no hay duda que, en el caso de marras, nos encontramos con tortura, privación de libertad sin debido proceso, persecución y/o actos inhumanos hacia mi patrocinado. Por ende, sostiene que don José fue torturado, encarcelado sin debido proceso, perseguido por fines políticos, pese a que no pertenecía a un partido, ya que asumieron que por estar en una marcha era comunista), fue allanado por personal de las FF.AA tras recuperar la libertad en su domicilio, con amenazas a su persona y/o familia, e inclusive sufrió de hacinamiento mientras estuvo privado de libertad, conducta que se encuentra comprendida en la letra k) del artículo 7 citado.

Cita y reproduce el artículo 29 y 75 concluyendo que el tratado condena los delitos y expresamente se hace cargo de indicar que frente a estos delitos corresponde aplicar restitución, indemnización y rehabilitación a sus víctimas, señalando en el artículo 75 N° 6 que nada de lo dispuesto en el artículo de indemnización podrá interpretarse en perjuicio de las víctimas conforme a derecho



interno o internacional. Es decir, corresponde que el Estado indemnice la presente acción.

Respecto de la Convención sobre el Derecho de los Tratados en Viena y su Anexo, ratificada en Chile, promulgada en el Decreto N°381 de fecha 05 de mayo de 1981 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, reproduce parte de su preámbulo que señala "(...) Los Estados Partes en la presente Convención, Considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales, Reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales.

Advirtiéndolo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma pacta sunt servanda están universalmente reconocidos,

Afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional,

Recordando la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados, (...)". Dicho de otro modo, el tratado reconoce la fuente del derecho internacional en los Estados suscriben, señalando principios básicos.

Transcribe y cita el artículo 26, norma que señala el Pacta Sunt Servanda, lo que significa que el Estado de Chile, si aplica un tratado, no puede realizarlo con resquicios, sino que con buena fe. Agrega y reproduce lo dispuesto en el artículo 27, rigiendo en la presente causa principios de derecho internacional, como la justa indemnización especialmente en acciones de índole humanitaria, que debe ser indemnizado.

Hace presente que esta convención exige la interpretación mediante la buena fe en el artículo 31, norma que reproduce.

En cuanto al Convenio de Ginebra, relativo al trato debido a los prisioneros de Guerra, explica que aquel convenio en su artículo 2 y 3 versan sobre su aplicación y respecto a los conflictos no internacionales; sin embargo, pese a regular por regla general el conflicto entre naciones, en su artículo 3 exige ciertos



estándares mínimos, como que todos los que no participen en el combate, deberán ser respetados en su vida e integridad corporal, libre de trato cruel, tortura, rehén, atentados contra su dignidad personal, entre otros. Imponiendo obligaciones a que todo herido deberá ser asistido, entre otros.

Aclara que en dicho convenio, en el artículo 4 se define que es un prisionero de guerra; luego en los artículo 13 y 14 del Convenio, se menciona el trato humano a los prisioneros, que por el hecho de ser prisionero no deberá ponerse en peligro su salud de manera alguna, tortura, insultos, entre otros. Luego señala que el artículo 22 dispone que los prisioneros de guerra no podrán ser internados más en establecimientos situados en tierra firme y con todas las garantías de higiene y salubridad; excepto en casos especiales justificados por el propio interés de los prisioneros, estos no serán internados en penitenciarías.

Respecto de la llamada Ley de Fuga aplicada y mencionada reiteradamente por los mandos de la dictadura militar y sus mandos dependientes, recuerda el artículo 92 que dispone que “un prisionero de fuera que intente evadirse y sea capturado antes de haber logrado la evasión en el sentido del artículo 91 no será punible, incluso en el caso de reincidencia más que con castigo disciplinario”

En lo que corresponde al trabajo de los prisioneros, cita los artículos 49-53, los cuales estipulan normas que el Estado debe de respetar, que se realice explotación de ellos siempre que sean físicamente aptos, en labores como agricultura, industria, servicios domésticos, comerciales, transporte, entre otros. Lo anterior bajo condiciones de trabajo convenientes, con vestimenta, alimentación y alojamiento que les permita desenvolverse. Evitándose de antemano que no puedan realizar contra su voluntad faenas insalubres o peligrosas. Y bajo jornadas no excesivas.

Concluye que el tercer convenio de Ginebra detalla una situación humana para los prisioneros de guerra; asunto que no ocurrió en nuestro país, era insólito considerar que el trato sería respetando al prisionero, sin abuso de poder alguno.

En lo que concierne a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, afirma que este tratado es el más importante en esta materia que consta en el Decreto N°873 del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgado el 23 de agosto de 1990; no sólo porque fija el deber del



estado de indemnizar, sino que la jurisprudencia mayoritaria funda toda indemnización acorde a este Tratado en particular.

Cita y reproduce el artículo 1, concluyendo que es un principio y deber internacional, respetar y garantizar los derechos que dicho tratado establece. Aún, si ellos, son en perjuicio económico del Estado, como es la justa indemnización determinada por Tribunales de Justicia.

Alega que el Estado frente a este tratado, y conforme a lo dispuesto en el artículo 2, tiene como deber garantizar disposiciones legislativas para hacer efectivos los derechos y libertades.

Expone que el presente tratado señala un listado de diversos derechos, entre ellos: El derecho al reconocimiento de personalidad jurídica; Derecho a la vida; Derecho a la integridad personal; resultando evidente que no se cautelaron los derechos de su representado, quien fue sometido a tortura y tratos crueles, hacinamiento, sin un proceso que cautelara sus derechos mientras estuvo privado de libertad; prohibición de la esclavitud y servidumbre; Derecho a la libertad personal, libertad de la cual el demandante fue privado conforme a lo dispuesto en el artículo 7, pues su privación de libertad fue por estar en una marcha, asumiendo los agentes del Estado que pertenecía a algún partido político.

Agrega que también se aseguran garantías judiciales en el artículo 8, donde se comprende que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho





irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. De lo anterior concluye que su patrocinado no fue sometido a un proceso judicial conforme a derecho, sino que sólo tuvo una visita al Fiscal Militar, en donde apuntado por fusiles firmó lo que se le obligó a firmar. Todo, porque las FF. AA asumieron que se trataba de un participante de izquierda. En todo momento se le trató de culpable, fue sometido a diversas prácticas de tortura, privado de libertad en condiciones de hacinamiento y sanitarias deficientes y mucho menos tuvo defensa.

De igual manera, afirma que se garantiza el principio de legalidad en el artículo 9, donde no se puede condenar por acciones u omisiones que no sean delitos.

Hace presente que el derecho a la indemnización se encuentra en el artículo 10; el derecho a la protección de honra y dignidad, se señala en el artículo 11, acusando que tanto la dignidad como la honra fueron privadas a su representado por medio de agentes del Estado.

Añade que también constan otros derechos en el tratado como libertad de conciencia, libertad de opinión, derecho a reunión, a rectificación., protección a la familia, a la nacionalidad, vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley, protección judicial, etc. Derechos que les fueron privados a su patrocinado al momento de detenerlo, hacinarlo en la cárcel pública y tras recuperar su libertad hasta el término de la dictadura.

Señala que el modo de interpretar el tratado es acorde al artículo 29 que dispone que "(...) Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o



persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. (...)”.

Añade que el artículo citado por la mayoría de la jurisprudencia corresponde al 63 N°1 que dispone “(...) Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. (...)”.

Concluye por lo anterior que la convención adecuadamente separa la reparación de las consecuencias y una justa indemnización, que son deberes con los cuales el Estado debe cumplir, y no interpretarlos en contra del artículo 29.

Sostiene que este tratado es reconocido por la jurisprudencia mayoritaria, citando al respecto el considerando décimo cuarto del Rol 244-2019 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas; y considerando quinto de la sentencia Rol N°18.179-19 de la Excma. Corte Suprema.

Manifiesta que la presente acción no es menor, toda vez que el Estado de Chile fue demandado en el año 2017 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por diversas agrupaciones de Presos Políticos que tras iniciar acciones ante los Tribunales de Justicia en el periodo de 1997 hasta el 2003, se encontraron con una privación de justicia, al determinarse por diversos Tribunales del país la prescripción de este tipo de causas conforme al derecho interno. En dicho fallo, de fecha 29 de noviembre de 2018 del “Caso Órdenes Guerra y otros VS. Chile”, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 15, 16 y la nota al pie N°68, se aprecia la postura del Estado de Chile, que reconoce su actuar como vulneratorio al Pacto San José de Costa Rica, al privar la



indemnización conforme a derecho de cada preso político; dicho de otro modo, nuestro Estado internacionalmente ha reconocido que este tipo de acción no prescribe y que corresponde a los Tribunales de Justicia determinar la correspondiente indemnización de perjuicios del daño moral.

Hace presente que conforme a dicho fallo se condenó al Estado a pagar a cada preso político la suma de 180.000 USD (dólares de EE. UU).

En cuanto a las normas de derecho interno relevantes, argumenta que hay dos normas que debemos analizar, la Constitución Política de la República y la Ley de Bases de la Administración del Estado.

En lo que concierne a la Constitución Política de la República, cita y transcribe los artículos 1, 5, 6, 7, 19 N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; artículo 21, 38 inc. segundo, concluyendo que la Constitución no obliga sólo a sus normas, sino que también al derecho internacional mediante los tratados vigentes y ratificados por Chile, por lo que ningún órgano ni persona podrá dejar de aplicar y/o respetar la constitución.

Respecto de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, Ley N°18.575, promulgada el 12 de noviembre de 1986, explica que esta norma fija el principio de responsabilidad del Estado, en sus artículos 3 y 4, reproduciendo esas normas.

Sobre la procedencia de la acción, manifiesta que hoy la Ley N° 20.357 en su artículo primero tipifica que tipos de crímenes son de lesa humanidad, de lo que se entiende como parte de un ataque generalizado contra una población civil, estipulando en sus demás artículos diversas sanciones, crímenes de guerra, entre otras.

Aclara que pese a la regla general en el daño civil, en materia de daño extracontractual moral, las vulneraciones a los derechos humanos son imprescriptibles, derivado de la aplicación de las normas y principios del derecho internacional que priman por sobre el derecho interno. Por lo que el límite de los 4 años del Código Civil no será un impedimento para exigir la reparación a esta parte. Es así, que de los artículos 2314, 2317, y 2329 del Código Civil, se regula el daño moral, mediante normas que exigen que todo daño debe ser reparado.

Destaca que pese a lo expuesto, nuestro país ha dado tal importancia a este tipo de asuntos, que inclusive se ha dedicado un día para el preso político que se



realiza el 30 de agosto. Sin embargo, aquello no es una solución, sino un mero reconocimiento de que fueron violados derechos y que debe de buscarse medidas para encontrar la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas de la dictadura. Recuerda que en esta materia, ya se ha declarado que procede la indemnización de los presos políticos, menciona al respecto fallos de la Excelentísima Corte Suprema Rol N° 3058-2014, Rol N° 1092-2015 Rol N° 13762-2016.

Manifiesta que su demanda y el monto de indemnización mencionado, no busca desconocer el trabajo que se ha realizado para promover los DD. HH, sin embargo, aquello no es, ni será una solución. No se traduce dicho trabajo en compensación alguna para los presos, exiliados y sus familias, no permite cerrar el capítulo de dolor. Y es entendible que un monto económico no podrá cumplir con aquello, sino que la reparación pecuniaria busca cumplir con el acercamiento a una solución. No es lo mismo tener dolor, que tener dolor con algún apoyo pecuniario que permita a la víctima y/o a sus herederos la posibilidad de salir adelante y poder colaborar con dar vuelta la página. Los preceptos para considerar del Código Civil son los artículos 2314 y 2320, que permiten entender que todo daño debe ser reparado (indemnizado) y de que toda persona es responsable tanto de sus acciones como de las que estuvieren a su cuidado, aplicándose perfectamente al Estado para responder por los hechos ocurridos durante la dictadura.

Adiciona que no sólo nos encontramos con la creación de normas que pueden inducir a que el Estado ha intentado trabajar por dar vuelta la página, sino que, en virtud de sus políticos, especialmente aquellos que forman parte del poder legislativo, han de sembrar la semilla de odio y/o en el caso que ya hubiere existido, reforzar el mismo, sólo con el objeto de estar en poder. Situación que el Estado debe evitar, ya que con ese tipo de mensajes por parte del legislativo el daño se mantiene a lo largo del tiempo, y aumenta el dolor de las víctimas y sus familiares, impidiendo de manera paralela, que se pueda trabajar en reformas profundas para una reparación íntegra.

Por lo anterior reclama una indemnización de \$200.000.000 o lo que este Tribunal estime pertinente, como consecuencia de los hechos mencionados, y daños derivados de violación de los derechos humanos por parte del Estado de Chile, mediante actos de torturas, hacinamiento, privación de libertad sin debido



proceso, vigilancia, persecución y allanamiento constante tras la recuperación de libertad, actos que ninguna suma de dinero podrá reparar en su totalidad.

El día 23 de julio de 2020, en folio 7, comparece el abogado Claudio Benavides Castillo, abogado Procurador Fiscal (S) de Punta Arenas del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, persona jurídica de Derecho Público, ambos domiciliados en esta ciudad en calle 21 de mayo N°1678 de Punta Arenas; contestando la demanda, solicitando en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, se rechace la acción deducida en todas sus partes, con costas.

Opone a la acción deducida la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante, por cuanto como se reconoce en la demanda, fue calificado por el Estado de Chile como víctima de prisión política y tortura, recibiendo por tanto los beneficios que diversas leyes de reparación han establecido en su favor.

Explica que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse en el ámbito de la llamada "Justicia Transicional". Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria. En efecto, el denominado dilema "justicia versus paz" es, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Añade que no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Recordemos que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no



preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Expone que estos programas, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Manifiesta que, como bien lo expresa la autora Elizabeth Lira, los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, en lo que respecta a la justicia transicional fueron "(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse". En lo relacionado con el segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley N°19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar



precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Sostiene que, en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el Ejecutivo siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas"; así, dos claros objetivos de estas normas reparatorias son la compensación de daños morales y mejora patrimonial.

De esta forma, concluye que en la discusión de la ley N°19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro, y esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover "la reparación del daño moral de las víctimas" a que se refiere el artículo 18.

Concluye que asumida esta idea reparatoria, la ley N°19.123 y, sin duda, las demás normas conexas como la referida a las víctimas de tortura, ley N°19.992, han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y Reparaciones simbólicas. Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará al tribunal a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

Destaca que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron dos posiciones, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía





hacerse a través de una suma única de dinero y otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios. En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de: Pensiones la suma de \$199.772.927.770 como parte de las asignadas por la Ley N°19.123 (Comisión Rettig); Pensiones: \$419.831.652.606 como parte de las asignadas por la Ley N°19.992 (Comisión Valech); Bonos: la suma de \$41.856.379.416 asignada por la Ley N°19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047 por la ya referida Ley N°19.992; y Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888 asignada por medio de la Ley N°19.123; Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$21.256.000.000. En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco ha desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.

Sostiene que desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio. El cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Observa que el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Alega que el demandante ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N°19.992 y sus modificaciones. Dicha ley y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados". Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.



Expresa que, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En este sentido, se concedió a los beneficiarios de la Ley N°19.234 como de la Ley N°19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa, contando actualmente con profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Expresa que PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006, el año 2014, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$4.580.892; los beneficiarios adquieren los derechos establecidos equivalentes para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos. Se ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura; Beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores; y se conceden beneficios en vivienda, correspondientes a acceso a subsidios de vivienda.

Respecto de las reparaciones simbólicas, manifiesta que este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral. La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la



víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Así, Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, expresa que debe descartarse que sea una reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, “pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) “Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida” y b) “Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo”.

Refiere que en la entrega de una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes: La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; El establecimiento, mediante el Decreto N°121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990; El establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras; Todos ellos unidos, a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

Por todo lo anterior, concluye que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH., no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional sino, que han provisto indemnizaciones razonables en relación con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Así las cosas, tanto la indemnización que se solicita en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar el mismo daño ocasionado por los mismos hechos.



De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, ser exigidos nuevamente. En este sentido, cita los considerandos 28 al 34, del fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, Rol 4742-2012 de la Excm. Corte Suprema; y agrega que diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales relativas a la procedencia de la indemnización.

Indica que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Así, en el caso Almonacid se señaló expresamente que “la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra pár. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US\$98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior el Tribunal considera no ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial (...)”.

Agrega que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades. En un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación, reconociendo la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil por la vía judicial. Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, ello



pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas; así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados.

Por tanto, alega que estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, y al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, es que opongo la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el demandante.

En subsidio de la excepción anterior, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva de la acción indemnizatoria deducida en autos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Funda su excepción en que según el relato fáctico del demandante, los hechos denunciados, el Sr. Pacheco señala que fue detenido el 27 de marzo de 1984, y que su detención ilegal duró 22 días, donde fue sometido a torturas físicas y psicológicas. Es del caso que, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, 6 de julio de 2020, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332



del Código Civil. En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechace íntegramente la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de lo anterior, en caso que este Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Explica que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles; por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Alega que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”.

Recuerda que la prescripción es una institución universal y de orden público. Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, consagrando con carácter obligatorio, el principio que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares, la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547 inciso 2º del Código Civil se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Sostiene que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494 inciso 1º del Código Civil). La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad:



resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Razona que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.

Expone que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Por ello es posible, sin duda, que la prescripción se produzca sin que el acreedor haya recibido lo que le corresponda y sin que haya tenido, con ello, intención de remitir la deuda de que se trate. Al acreedor tendrá que reprocharse una grave negligencia, pero, por encima de su interés personal, se impone la necesidad de fijar un término a las acciones. En la práctica, los pocos casos en que la prescripción produce resultados chocantes, ellos no pueden compararse con los infinitos casos en que viene a consolidar y a proteger situaciones regulares y perfectamente justas. La prescripción extintiva, un modo de extinción de las obligaciones, es llamada con bastante propiedad por la doctrina, como un modo de liberación de las obligaciones, o sea, algo más que su extinción.

Los planteamientos doctrinarios anteriores, le permiten concluir que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Sostiene que la prescripción no es en sí misma una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.





Añade que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización; solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción. Por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa. En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

Argumenta que nuestra Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. En dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva (considerando octavo); que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal (considerando cuarto, quinto, sexto, séptimo); que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto (considerando octavo, décimo); que no obstante, la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, detención del demandante en este caso,



sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Arguye que, a partir del año 2007, existen numerosas sentencias en el mismo sentido, que constituye jurisprudencia uniforme respecto a la materia, y que por lo tanto han acogido la excepción de prescripción, en los términos planteados por esta parte.

Expone que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté expuesta a extinguirse por prescripción. Sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece al ámbito patrimonial.

Indica que basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Finalmente, en cuanto a la alegación del demandante sobre la imprescriptibilidad de la acción para obtener la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, afirma que ninguno de los instrumentos internacionales citados por su contraparte contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.



Explica que la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", aprobada por Resolución N°2391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letra a) declara imprescriptibles a "los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Afirma que los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

Refiere que la Resolución N°3074, de 03 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada "Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad", se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

Alega que la Convención Americana de Derechos Humanos, sin perjuicio que la aplicación de dicho Tratado no es atingente al caso sub-lite puesto que en la época en que acontecieron los hechos no estaba vigente dado que fue publicado en el Diario Oficial el 05 de enero de 1991; ninguna duda cabe que la citada normativa no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. En relación a esta Convención, destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Añade que el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,



específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile. Transcribe la norma y afirma que el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Arguye que su planteamiento ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema, que ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso Nº1133-06, caratulados "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile", de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas; manteniendo dicho sentido en reiterados de sus fallos.

Declara que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado; debiendo en consecuencia rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formula las alegaciones siguientes en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido de \$200.000.000 por cada uno de los demandantes.

Con relación al daño moral hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.



Afirma que en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Menciona que al respecto, la Excm. Corte Suprema ha dicho: “Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”. Es en esta perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización, asumiendo la premisa indiscutida que nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades. No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del tercero civilmente responsable en un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda



como compensación del daño moral, resulta claramente excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Hace presente que la I. Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto en materia similar a la de autos que para fijar el quantum debe acudir al Principio de Prudencia que conduce a la proporcionalidad. Cita al respecto el considerando cuarto de Rol N°6891-2013 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago

En subsidio de las excepciones de pago y prescripción de las acciones deducidas, su parte alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos SS. debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por el demandante de parte del Estado conforme a la Ley N°19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente, y que seguirá percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral.

Arguye que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Hace presente que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente el monto pecuniario demandado.

Agrega que a la fecha el actor ha recibido la suma total de \$29.355.339, manteniendo, además, una pensión mensual denominada "Valech" de \$189.552.

Sostiene que la indemnización que pudiere hipotéticamente llegar a regularse en la presente causa, debe ser fijada por el tribunal en la sentencia, en valores de poder adquisitivo imperantes a la fecha de su dictación, de manera que no corresponde aplicar reajustes a esas sumas, sino solo con posterioridad a tal regulación, desde que la sentencia cause ejecutoria y hasta el pago efectivo, y no como lo pretende la demandante, desde la fecha de la demanda.

Respecto de los intereses, refiere que no tratándose en la especie de sumas adeudadas con anterioridad, sino de indemnizaciones establecidas por el tribunal,



es improcedente el pago de intereses, y de condenarse a aquellos, deberán considerarse sólo los corrientes y desde la fecha en que se incurra en mora en el cumplimiento de la obligación establecida por sentencia ejecutoriada. En efecto, cobran aplicación consecuencial los artículos 1551 N°3, 1556, 1557 y 1559 del Código Civil que, en lo pertinente, disponen que se debe indemnización de perjuicios, en este caso moratoria, desde que el deudor se ha constituido en mora y se requiera judicialmente su cumplimiento.

Razona entonces, supuesto que el demandado sea constituido en mora una vez establecido en la sentencia la determinada y líquida cantidad de dinero que éste habrá de pagar, se deberán por dicha mora sólo los intereses corrientes, a contar de la fecha en que el fallo se encuentre ejecutoriado y se requiera judicialmente su cumplimiento. Por tratarse de una acción indemnizatoria extrajudicial y no de una operación de crédito de dinero, los intereses atrasados no producen intereses. En consecuencia, solamente una vez que el demandado sea declarado deudor de una indemnización por sentencia que se encuentre ejecutoriada, la obligación será líquida y podrá incurrir en mora si retarda culpablemente su pago, correspondiendo en tal caso la aplicación los intereses corrientes, sea de los determinados para operaciones reajustables o no reajustables, según lo que se resuelva a propósito de la reajustabilidad de las sumas que se ordene pagar y no antes de ello. Así se ha resuelto por lo demás, en numerosos fallos de la I. Corte de Apelaciones de Santiago y de la Exma. Corte Suprema.

El día 29 de julio de 2020, en folio 12, comparece la parte demandante evacuando el trámite de réplica en los términos que señala.

Alega que consta en el escrito de contestación que su contraria no niega expresamente la calidad de preso político de su patrocinado.

Hace presente que su parte citó la causa órdenes Guerra y Otros vs Chile, en la que consta que hasta el año 2015 oscilaba la posibilidad de acoger o rechazar la prescripción. Sin embargo, la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema conforme al pacto San José de Costa Rica, aplicó el derecho en pleno cumplimiento a las normativas internacionales, primando el derecho internacional por sobre el derecho interno. Y no sólo eso, sino que se distribuye este tipo de causas en sala especializada.





Transcribe el párrafo 94 de dicha causa concluyendo que nuestro Estado ante un órgano internacional, fue condenado por incumplir en esta materia respecto de los demandantes. Pese a lo anterior, la contraria en su escrito de contestación no se pronuncia sobre el fallo citado. A tal punto, que solicita en su escrito de contestación la prescripción, la reparación satisfactiva y en subsidio una rebaja por aportes del Estado; llamando su atención pues internacionalmente el Estado expone una postura clara y robusta que no prescribe y que debe determinarse una justa indemnización; pero al ser demandado, olvida dicha postura en sede internacional.

Reitera que este tipo de causas no prescriben, y afirma que existe robusta jurisprudencia, mayoritaria desde el 2013 en adelante, que rechaza expresamente la defensa del Consejo de Defensa del Estado, negando tanto la excepción de reparación satisfactiva como la de prescripción; quedando los Tribunales de Justicia amparados para determinar la justa indemnización en este tipo de materias.

Señala que el Consejo de Defensa del Estado es el órgano que defiende los intereses del Estado, y en dicho contexto, pese a que conoce o debe conocer por la cantidad de demandas e indemnizaciones conferidas en esta materia a los diversos presos políticos, sigue negando hasta la fecha la viabilidad de la acción.

Cita una serie de jurisprudencia que avala su postura.

Respecto de la excepción de reparación satisfactiva, explica que la Ley N°19.123 creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, cuyo fin acorde a su artículo primero es coordinar, ejecutar y promover acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión nacional de Verdad y Reconsideración. Sin embargo, dicha Corporación conforme a su artículo 16 tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 1996.

En cuanto a la Ley N°19.992, expone que conforme a su artículo primero establece una pensión anual de reparación en beneficio de víctimas directas por violaciones a los derechos humanos en el listado de prisioneros políticos y desaparecidos.

Cita y transcribe el considerando primero de la sentencia de 03 de septiembre de 2018, causa Rol N°264-2018 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, que aclara que dentro de los objetivos de la ley N°19.123 estuvo el de



intentar reparar solo en forma parcial el daño sufrido por las víctimas, por cuanto se estaba consciente que, por la naturaleza y dimensión del mismo, ésta nunca sería total. En otras palabras, dicha normativa, se trata de una política asistencial del estado, es decir, un aporte voluntario. En el mismo sentido menciona el considerando sexto de sentencia de fecha 14 de julio de 2014, dictada por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N°3058-2014. Igual idea se repite en causas rol N°5831-13 y N°1092-2015 de la Excelentísima Corte Suprema.

Manifiesta que la justa indemnización debe ser determinada por un Tribunal de Justicia, y dichas pensiones y/o beneficios entregados voluntariamente por el Estado son prestaciones asistenciales, que no comprenden el daño moral particular del preso político.

Transcribe el considerando cuarto de la sentencia de fecha 25 de febrero de 2019, Rol N°29251-2018 de la Excma. Corte Suprema, y afirma que el aporte de dicha norma es parcial, y no será jamás una reparación integral del daño; ya que de interpretarse lo contrario, sería una evidente vulneración al artículo 63.1 del Pacto San José de Costa Rica. En el mismo sentido cita el considerando undécimo de la sentencia de fecha 26 de abril de 2017, dictada por la Excelentísima Corte Suprema, en causa Caratulada "Lastra con Fisco de Chile", bajo el Rol N°11767-2017.

Argumenta que la jurisprudencia mayoritaria ha entendido tanto de la ley N°19123 y N°19992 como indemnizaciones, sería eludir la propia responsabilidad del Estado, y atentaría contra las normas de reparación integral. En este sentido cita el considerando segundo de la sentencia de 14 de septiembre de 2015, Rol N°1092-2015 de la Excma. Corte Suprema.

Refiere que por el año 2018 se ha mantenido el criterio expuesto por su parte, transcribe el considerando tercero de sentencia de fecha 06 de julio de 2018, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, caratulada Provoste con Fisco de Chile, Rol N°31-2018; concluyendo que frente a la excepción de reparación satisfactiva, ha quedado acreditado que no se trata de una indemnización de daño moral, y que las leyes N°19.123 y N°19.992 sólo han generado prestaciones asistenciales. En caso contrario, su contraria deberá para el éxito de su pretensión aclarar: a. ¿Dónde supuestamente firmó su patrocinado como condición del pago de las leyes señaladas una renuncia de acciones?; b. ¿En



qué norma figura una renuncia y/o prohibición de interponer acciones por ser beneficiario de dichas leyes?; c. De ser una excepción que prive toda indemnización ¿por qué el Estado negocia la indemnización en este tipo de casos como ocurrió en la causa Rol N°244-2019 de la Iltrma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas? ¿Cómo es viable que pacten transacciones si acorde a su pretensión no correspondería la acción? ya que de estimarse improcedente la acción malamente negociaría el Estado.

Sobre la excepción de prescripción, cita y transcribe el considerando quinto de sentencia de fecha el 14 de julio de 2014, dictada por la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N°3058-2014; el considerando quinto de sentencia de fecha 10 de abril de 2017, dictada por la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N°68.876-2016; considerando octavo de sentencia de fecha 16 de junio de 2020, dictada por la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N° 34.111-2019; concluyendo que la jurisprudencia comprende que este tipo de acción no prescribe, además de reiterar que intentar dividir la acción penal de la civil será un trato discriminatorio.

Señala que el derecho interno no es un impedimento para conceder la justa indemnización, si la acción deriva de un delito de lesa humanidad reconocido por el Estado. Para reforzar esta idea cita y transcribe el considerando décimo de fecha 16 de agosto de 2016, dictada por la Excelentísima Corte Suprema Rol N°13762-2016; el considerando quinto de sentencia de fecha 10 de abril de 2017, dictada por la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N°68.876-2016; considerando sexto de sentencia de fecha 14 de septiembre de 2015, dictada por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 1092-2015.

Hace presente que no se ha creado un derecho mediante esta supremacía de la normativa internacional en donde se entiende que las normas del derecho común no son aplicables frente a acciones de indemnización de presos políticos. Sino que se ha reconocido un sistema que siempre ha existido.

Conforme a lo expuesto, razona que en este tipo de acciones, no rige la prescripción del derecho interno solicitada por su contraria.

En cuanto al daño, alega que la parte demandada cita el fallo N°6891-2013, que corresponde a una causa en la que se acoge este tipo de acción, sin embargo, por un monto menor.



Recuerda que la presente causa versa sobre hacinamiento y tortura en contra de su patrocinado; no de meras lesiones ni simples insultos, por lo que el Tribunal al momento de dictar sentencia deberá ponderar la prueba rendida, la calidad especial de preso político, el efecto tanto de los allanamientos posteriores al momento que su patrocinado recuperó su libertad, como la tortura que sufrió. Situaciones por las que se le privó su calidad de ciudadano y humano, desvirtuado y vulnerado a niveles inimaginables, por agentes del Estado que debían protegerlo. Y todo bajo secretismo y manto de impunidad. No se debe olvidar, que la tortura es un tipo de daño permanente en lo más profundo del alma.

Alega que tampoco es un factor delimitante de la acción los días que estuvo hacinado y que sufrió tortura, más su contraria sólo menciona en la sección prescripción 22 días, pero no contabiliza los años de allanamientos posteriores hasta 1990. Es decir, en cualquiera de esos allanamientos sorpresa, mi patrocinado pudo ser llevado nuevamente a la cárcel, como también a otro centro de tortura, isla Dawson, e inclusive, pudo ser fusilado. Temor constante al que se enfrentó por largos periodos. No es un daño equiparable a meras lesiones corporales que sanan tras el tiempo.

Explica que el fin de la indemnización es la reparación integral del daño, lo que se encuentra en el artículo 2329 del Código Civil, es decir, todo daño debe ser indemnizado. Especialmente por parte del Estado que actuó por medio de sus agentes. Además, este principio de la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional, y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado. Para fundar su argumento, cita el considerando octavo de sentencia del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, causa Rol N° C-682-2016.; razonando que el Tribunal prudencialmente fijará la justa indemnización por este tipo de indemnización. Agrega el considerando décimo noveno de la sentencia dictada en causa Rol N°244-2019 dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, y refiere que el Tribunal ad quo, correspondiente al Tercer



Juzgado de Letras en lo Civil de Punta Arenas, determinó como justa indemnización \$100.000.000 a cada preso político.

Arguye que sin perjuicio de la facultad de fijar prudencialmente el daño por parte del Tribunal, citar montos concedidos como referencia en causas ejecutoriadas, que son: Causa Valencia con Fisco de Chile del 18° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N° 803-2008, se acogió respecto de cada preso político la suma de \$150.000.000. Monto que no sufrió alteraciones tras ser conocido por la Excelentísima Corte Suprema bajo el Rol N° 1092-2015; Causa 13762-2016 de la Excelentísima Corte Suprema, se rechazaron los recursos de casación, por ende, se confirman los montos fijados de \$150.000.000 para Mónica Contreras Hidalgo y \$80.000.000 para Jorge Cubillos Gálvez, ambos cónyuge y hermanos de la víctima; Causa Provoste con Fisco de Chile del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, bajo el Rol N° C-682-2016, se concedió a cada uno de los demandantes la suma de \$160.000.000. y Se confirmó el fallo, con declaración, sin recurso de casación en contra, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por la suma de \$130.000.000 a cada uno de los demandantes, bajo el Rol N°31-2018; Causa de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, Cortes con Fisco de Chile, en donde demandan tanto hijos y hermanos por la muerte de los presos políticos que se identifican, obteniendo sumas entre \$40.000.000 y \$100.000.000 por el grado respecto de aquel; Bajo el Rol N°264-2018. Montos que se ratificaron ante el rechazo de la casación en el fondo interpuesta por el Fisco, en causa Rol N°29.251-2018 de la Excelentísima Corte Suprema; Causa Rol N°21.189-2013 del 12° Juzgado en lo Civil de Santiago, que condenó al fisco a pagar a cada demandante la suma de \$100.000.000, lo que fue confirmado en sentencia de fecha 10 de mayo de 2019 dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, sin recurso en contra.

Alega que actualmente frente al tipo de argumentos señalado por el Fisco de Chile, la sentencia más actual en materia de indemnización a presos políticos y/o a sus familiares ha mantenido el criterio expuesto por su parte, señalando que “por las consideraciones precedentes ninguno de los capítulos comprendidos en el recurso de casación en el fondo intentado por el Fisco de Chile puede prosperar, adoleciendo, por tanto, de manifiesta falta de Fundamentos”.



Alega que el artículo 5 de nuestra Carta Magna, exige al Estado promover, garantizar y respetar diversos derechos Constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. El Estado ratificó diversos convenios, entre ellos, "la convención sobre el derecho de los tratados en Viena y su anexo" cuyos artículos 26, 27 y 31 son esenciales, es decir, el cumplimiento de buena fe, y que no podrá invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Considerando que el derecho internacional debe respetarse y cumplirse de buena fe sin que sea una excusa el derecho interno, corresponde aplicar el resto de los tratados ratificados por Chile, resultando esencial el Pacto San José de Costa Rica, que acorde a sus artículos 1.1 y 63.1, impone que ante la violación de derechos protegidos es deber del estado reparar las consecuencias junto al pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Acusa que no es viable considerar como una "justa indemnización" los aportes voluntarios del Estado, ya que no se hace cargo del daño moral específico de su patrocinado, y mucho menos ha sido determinado ante el órgano que está habilitado para establecer las indemnizaciones en juicio. Es decir, sólo los Tribunales de Justicia podrán determinar una justa indemnización, además, que como ya se señaló su patrocinado no ha firmado documento alguno que implique renuncia de esta acción. Asimismo, la contraria no ha señalado en qué parte de las leyes citadas, especialmente aquellas de aportes voluntarios consta una prohibición expresa de este tipo de acciones. E inclusive, el hecho de citar las leyes N°19.123 y N°19.992, reconoce tácitamente la contraria la existencia de daño moral por los hechos demandados. Asimismo, estimar o entender prescripción de acciones que derivan de crímenes de lesa humanidad, que fueron realizados por agentes del Estado bajo un manto de impunidad, implica directamente incumplir con otorgar la justa indemnización.

Hace presente que nuestra jurisprudencia mayoritaria bajo principios y normas del derecho internacional, ha logrado dar cumplimiento a la justa indemnización de diversos presos políticos, cumpliendo de dicho modo, con las normas vinculantes para el Estado en cuanto a los Tratados Internacionales ratificados.



Alega que resulta discriminatorio, entender que respecto de unos presos políticos procede la acción y que de otros no. No resulta lógico que la contraria utilice actualmente dichas excepciones, no sólo por la jurisprudencia mayoritaria expuesta y los tratados internacionales. Sino que, inclusive la contraria ha negociado, ha efectuado transacción por este tipo de acción, tal y como consta en causa Rol N°244-2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Transacción que no hubiese celebrado, de no tener clara la procedencia de este tipo de acciones.

Con fecha 06 de agosto de 2020, en folio 14, comparece la parte demandada, evacuando el trámite de dúplica en los términos que exponen, y en definitiva se rechaza la demanda interpuesta en todas sus partes.

Reitera que el daño moral ya ha sido indemnizado, por lo que procede se haga lugar a la excepción alegada. Insiste respecto al marco general de las reparaciones ya otorgadas, al esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, respecto a las reparaciones percibidas por los demandantes cónyuges, madres e hijos de las víctimas, ya sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación.

En relación a la prescripción de la acción deducida en este juicio, insiste en la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol N°10.665-2011 "Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno", donde se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil. La aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican "a favor y en contra del Estado".

Añade que la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Pleno de la Excma. Corte queda ampliamente





establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia.

Cita y transcribe los considerando quinto, sexto, séptimo, octavo,, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, y décimo cuarto, de sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 16 de marzo de 2016, donde se pronunció respecto a la excepción de pago y de prescripción; reiterando lo ya expuesto en su contestación y rechaza las argumentaciones de la actora realizadas en su escrito de réplica.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 748 del Código de Procedimiento Civil, se omite el llamado a conciliación.

Con fecha 13 de agosto de 2020, folio 16, se recibe la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos materia de acreditación.

Por resolución de 18 de enero del año en curso, folio 84, se citó a las partes para oír sentencia.

**Considerando:**

**Primero:** Tal como se dijo con anterioridad, compareció Juan José Arcos Srdanovic en representación convencional de José Luis Pacheco Cisternas e interpuso demanda ordinaria en juicio de hacienda solicitando la indemnización de los perjuicios por daño moral, en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representado por el Procurador Fiscal Claudio Benavides Castillo, abogado, ya individualizado. Solicitó que se acoja la demanda en todas sus partes, condenando al demandado a pagar una indemnización por el daño moral ascendente a la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) o la suma que el Tribunal estimara pertinente por concepto de daño moral en favor del demandante, más el máximo de interés legal y reajustes a partir de la fecha del fallo o la fecha que el tribunal estimase pertinente, todo lo anterior con costas.

Funda su pretensión en los argumentos reseñados en la expositiva, los que se dan por reproducidos para evitar reiteraciones inconducentes.

En folio 7, el demandado Fisco de Chile, representado por el abogado Claudio Benavides Castillo, contestó la demanda. Solicitó que conforme a las



excepciones, defensas y alegaciones opuestas en dicho escrito, se rechaza la acción deducida en todas sus partes, con costas.

**Segundo:** La **parte demandante** acompañó los siguientes antecedentes y medios probatorios.

En folio 32 acompaña los siguientes documentos:

1. Informe de daño a consecuencia de prisión política, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, respecto de José Luis Pacheco Cisternas; emitido y firmado con fecha 08 de octubre de 2021 por los funcionarios del programa PRAIS, departamento de Salud Mental de Magallanes, Alejandro Valle Soto y Juan Vukucic Covacic.

2. Certificado de inscripción en el registro Nacional de prestadores individuales de Salud de Juan Vukusich Covacic, de fecha 14 de octubre de 2021, emitido por la Superintendencia de Salud.

3. Certificado de inscripción en el registro nacional de prestadores individuales de salud a nombre de Alejandro Valle Soto, de fecha 14 de octubre de 2021, emitido por la Superintendencia de Salud.

4. Copia simple de sentencia de fecha 14 de septiembre de 2015, dictada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°1092-2015.

5. Copia simple de documento titulado como Transacción, celebrada por el Consejo de Defensa del Estado, representada por la abogada Paula González Cáceres y el abogado Oscar Gibbons Munizaga; en causa rol 244-2019 de la Ilustre Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

6. Sentencia de fecha 04 de enero de 2019, dictado por el 9 Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-36.949-2017, caratulados "Torres con Fisco de Chile".

En folio 41 acompaña los documentos:

7. Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2017, dictada por el 1° Juzgado de Letras de Punta Arenas, en causa rol C-682-2016, autos caratulados "Provoste con Fisco de Chile".

8. Sentencia de fecha 25 de junio de 2018, dictada por el 18 Juzgado Civil de Santiago, en Rol C-20.669-2016, autos caratulados "Concha con Fisco de Chile".



9. Sentencia de fecha 03 de septiembre de 2018, dictada por la Iltna. Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol Civil-264-2018.

10. Sentencia de fecha 25 de febrero de 2019, dictada por la Excma. Corte Suprema, en Rol N°29.251-18.

11. Resolución de fecha 27 de marzo de 2020, dictada por la Iltna. Corte de Apelaciones, en Rol N° Civil 244-2019.

12. Sentencia de reemplazo de fecha 06 de diciembre de 2019, dictada por Excma. Corte Suprema en rol N°18.179-19.

13. Sentencia de fecha 14 de octubre de 2020, dictada por la Iltna. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en Rol N°35-2020 Civil.

En folio 63 rola audiencia de exhibición de documentos correspondientes a documentos acompañados en folio 32, quedando en custodia de este Tribunal bajo el N°817-2021:

14. Copia simple de informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

15. Copia simple de la Nómina de personas reconocidas como víctimas al 28 de noviembre de 2004.

16. Copia simple de informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo I; emitido por la Corporación Nacional de Reparación y conciliación.

17. Copia simple de Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen II, Tomo 2; emitido por la Corporación Nacional de Reparación y conciliación.

18. Copia simple de Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen II, Tomo 3; emitido por la Corporación Nacional de Reparación y conciliación.

19. Set de 4 fotografías digitalizadas del Diario La Prensa Austral de los días 2 y 3 de abril de 1984.

20. En folio 45 comparece el testigo Alejandro Tihomir Domancich, quien juramentado legalmente, respecto del punto de prueba 1, declara que en una oportunidad que se encontraron con José Luis Pacheco después de su niñez y adolescencia, se fueron a tomar un café, y mientras conversaban, se dio cuenta que no era la misma persona alegre que era antes. Y le empezó a contar lo que le



había pasado, que en una protesta después del "Puntarenazo", no recuerda la fecha exacta pero fue en 1984, él estaba en el centro de la ciudad, en una manifestación pacífica, y de un momento a otro llegaron personal de las fuerzas armadas, y empezaron a tomar personas al azar, y los llevaban, haciéndoles levantar la mano, bajo amenaza de muerte si no lo hacían. Le contó que levantó las manos y se quedó quieto, y comenzaron a pegarle puños y patadas, a tal grado que lo dejaron inconsciente, siempre tratándolo con insultos, que eran comunistas y socialistas, y que querían desbaratar el gobierno. Posterior a eso, lo llevaron vendado, me contó, y se encontró en una celda pequeña con gran parte de los manifestantes que estaban con él en la protesta. Ahí recibió más malos tratos por parte de los uniformados, con insultos y amenazándolo de matarlo. De ahí los iban sacando de a uno y los iban interrogando, con golpes e insultos, y amenazas de hacerle daño a su familia, si es que no hablaba. Que los sacaban de a uno de la celda en que estaban todos los detenidos, y cuando le llegó el turno, lo sacaron vendado y bajo amenazas, por lo que ya temía su muerte, pues lo que más le recalcaban era "te vamos a matar, te mataremos". Le contó que en el momento del viaje, lo iban golpeando además de los insultos y amenazas de muerte, y cuando le sacaron la venda, después de quedar casi inconsciente nuevamente, se da cuenta de que está en la Cárcel Pública, en una celda pequeña, donde había dos camas, había alrededor de 5 a 6 personas detenidas en la misma celda, quienes se turnaban para ocupar las camas o dormir como pudieran. En todo momento de estar detenido en esa celda, estaba sin luz, solamente la encendían para ir a reírse de ellos, increparlos y amenazarlos. En cuanto a la alimentación proporcionada, solamente les daban una olla común de la que comían todos los detenidos, y el que podía comía más o menos según lo que alcanzaba. Eso le contó respecto a su detención, lo que vivió al estar preso, y le dijo que cada cierto tiempo, lo sacaban de la celda, realizaban un simulacro de fusilamiento, apuntándole a la cabeza con armas de fuego. Por todo lo anterior razona que violaron sus derechos humanos. Los días que estuvo preso, fueron como 20 ó 22 días, pasando todas esas penurias que le relató.

Repreguntado al respecto manifiesta que las violaciones a los derechos humanos mencionadas, no sólo fueron hasta el término de su privación de libertad, sino que después de eso tuvo hostigamientos por parte de las fuerzas



militares, allanamientos seguidos en su domicilio. Siempre lo amenazaban a él si estaba en casa, y si no, amenazaban a sus familiares. También tuvo un seguimiento por parte de los militares, lo seguían a todos lugares, porque pensaban que José Luis pertenecía a algún partido político contrario al régimen militar de esa época, o simpatizante.

A punto de prueba N° 2, sostiene que sí le causaron perjuicio. Lo primero que le pasó, fue perder el trabajo, pues trabajaba en ENAP y al llevárselo detenido perdió el trabajo. Aparte de eso, lo más importante que perdió fue su tranquilidad mental, lo que le acarreó problemas psicológicos hasta el día de hoy, a tal extremo, que cuando ve a algún uniformado empieza de tiritar. Él le había contado eso, que al ver un militar, le volvían los recuerdos de todo lo que le había pasado, su detención, torturas, golpes; agrega que en una oportunidad, estando juntos en el centro conversando, pasó un militar y se puso muy mal, tiritaba y estaba como desenchajado, pálido, así que trató de calmarlo y lo invitó a tomar un café para que reaccionara. Otras pérdidas, además de su trabajo, es el trauma psicológico que le dejó esa detención, que no sabe si logrará recuperarse en algún momento.

Repreguntado añade que el Sr. Pacheco sufrió perjuicios de índole social, pues al saber lo que le ocurrió lo van alejando o discriminando, también tuvo problemas con la familia, y le cambió todo su estilo de vida, por la preocupación de si andaban siguiéndolo o no.

Al punto de prueba 3 refiere que el monto no lo sabe, sabe que tiene que recibir una indemnización, por todos los daños provocados por perder el trabajo, pero, a su juicio, lo más importante fueron todos los malos tratos que recibió, pues eso no se le va a borrar de su mente, quedando con traumas psicológicos graves, que no es algo que se pueda olvidar de la noche a la mañana; si bien es cierto fueron 22 días de tortura, pero esos 22 días le causaron un gran daño psicológico, y por consiguiente para su entorno familiar.

21. En el mismo folio depone el testigo Luis Enrique Mansilla Cárcamo, quien juramentado declara al punto de prueba que es conocido del mismo barrio con el demandante y su hermana. En la población son muy unidos, en la Fitz Roy, y por lo pequeña que es la ciudad, cualquier cosa que sucedía uno se enteraba, ya sea por vecinos o por las noticias en la Prensa. Por eso, sabe que el año 1984, José Luis Pacheco fue detenido, en una de las tantas protestas que se hicieron. Él



estuvo detenido en la Cárcel Pública, en Waldo Seguel estaba, estuvo hacinado, pues las celdas son pequeñas, y había varios detenidos en una misma celda, también fue torturado física y psicológicamente. Hasta la actualidad todavía tiene secuelas en sus hombros y brazos, por los golpes que le dieron los militares y carabineros, de la época. Después de estar más de 20 días privado de libertad, también fue amenazado y allanado en su domicilio, lo amenazaron a él y a su familia, lo detenían en cualquier lugar, en la calle. Y producto de su detención y que quedaron sus papeles manchados, tuvo muchas dificultades para volver a encontrar trabajo, sobre todo en esa época, pues sus documentos de antecedentes, decía que estuvo detenido. Por otro lado, todavía tiene secuelas psicológicas por las torturas, pesadillas, y mal dormir, incluso si en la calle ve a un uniformado le vuelven los recuerdos de lo sufrido a causa de la detención y torturas. Todo eso menoscabó el que sus cotizaciones previsionales estén al día, pues tiene una gran laguna, por el hecho de no haber podido encontrar trabajo después de su detención.

Repreguntado al respecto agrega que José Luis Pacheco nunca perteneció a algún partido político; al estar privado de libertad estuvo hacinado en una celda pequeña, con malos tratos, sin alimentación, y constantemente agredido e interrogado, simulando a veces que le iban a disparar; y finalmente cuando habla de tortura se refiere a torturas físicas, golpes, lo desnudaban, lo humillaban psicológicamente, amenazado con que irían a la casa de su familia para hacerles daños a ellos.

Al punto de prueba N°2, estima que si le provocaron perjuicios, en lo económico por la falta de oportunidad para encontrar trabajo, en desmedro de sus cotizaciones para su futura pensión; y la oportunidad de poder andar tranquilo por la calle, por la vida.

Repreguntado al respecto añade que el demandante antes de los eventos materia de autos era una persona alegre, buen amigo de sus amigos, muy apegado a su familia, sobre todo a su mamá; hoy día es una persona más triste, muy inseguro, lo ve desanimado, y sin tanta vida como era antes de su detención. Y todavía tiene muchos dolores físicos, en piernas y hombros, por los golpes que le dieron en su detención.



En cuanto al punto de prueba N°3 manifiesta que fue por los maltratos psicológicos, físicos y monetarios, sin saber el monto que está demandando.

22. En folio 48 reiterado en folio 49, comparece el testigo Sergio Agustín Neicul Avendaño, quien debidamente juramentado, respecto del punto de prueba N°1 explica que a José Luis Pacheco lo conoce pues era del barrio, le decía tío y lo recuerda pues él los llevaba a la cancha a jugar futbol, y en ese tiempo en que lo tomaron detenido en 1984, se enteraron por la prensa José Luis estaba detenido. Fueron a preguntar a su familia qué le había pasado, y les contaron que lo habían tomado preso, y que les dijeron que iba a salir al tiro pero estuvo detenido como 22 días. De ahí se cambió de barrio, dejó de contactarme y no lo vi más, hasta que hace como un año, se volvieron a encontrar. Volvieron a conversar y le contó que estuvo detenido. Le preguntó cómo quedó con lo que le pasó ese año, y le dijo que quedó con secuelas porque lo habían torturado. Como lo vio que andaba muy inquieto, le preguntó por qué andaba tan inquieto, le dijo, por la misma situación que había vivido, por los malos tratos quedó con secuelas. Y cuando se encontraron iban pasando por el lado de un regimiento, y empezó como a tiritar. Entonces le comentó que estaba en una demanda, y le preguntó si le podía servir de testigo, por lo que le habían sucedido el año 1984. Le respondió que sí.

Repreguntado al respecto el testigo añade que el contexto en que fue privado de libertad el demandante fue porque andaba en la calle, pensaron que él supuestamente andaba en las protestas en el centro, que el Sr. Pacheco no pertenecía a ningún partido político; que estuvo preso en la Primer Comisaría que estaba en Waldo Seguel; y que al hablar de torturas se refiere a que le pegaron y lo insultaron, amenazaron a su familia para que diga qué andaba haciendo cuando lo llevaron preso.

Al punto de prueba N°2, responde de manera afirmativa por las torturas que le hicieron cuando estuvo detenido; quedó con secuelas y por eso es que está demandando.

Repreguntado al respecto indica que cuando habla de secuelas se refiere a los insultos de los que fue víctima, las amenazas de las que fue víctima su familia, pues le decían "te vamos a matar", por esas razones el demandante quedó afectado. Todo lo anterior le consta porque se encontró con el Sr. Pacheco y le conversó toda la situación que había vivido esos años.





Al punto de prueba N°3 expresa que demanda por lo que sufrió en ese momento, por su dignidad una suma alta, cerca de \$140.000.000.

Repreguntado aclara que a los sufrimientos a los que se refiere corresponde a que en las noches él no puede dormir bien, que despierta asustado, y cuando sale al centro y ve un militar queda como asustado; todo lo anterior le consta porque el demandante le conversó cuando se encontraron y lo vio.

23. En folio 54 comparece el testigo Alejandro Darío Valle Soto, quien previamente juramentado, al punto de prueba N°1 declara la efectividad de lo que se le consulta, el demandante está acreditado como víctima de los derechos humanos, en el periodo consultado por la Comisión de Verdad y Tortura, del informe Valech. A través de esta comisión se responde la pregunta de si sufrió detención y tortura por motivos políticos, por agentes del Estado de Chile. Y los hechos se especifican en relación a su detención en el año 1984, posterior al "puntarenazo", donde el señor Pacheco, es detenido y golpeado en la vía pública, recibiendo amenazas, golpes, apremios ilegítimos, trato degradante, hacinamiento, y una serie de condiciones durante su detención, que configuran acreditada la prisión política y tortura.

Repreguntado al respecto expone que al hablar de torturas se refiere a amenazas, golpes, trato degradante, posición forzada, exposición a condiciones de hacinamiento que se asocian a constantes hostigamientos psicológicos por parte de los agentes del Estado. Todo lo que configura la detención en general del evaluado, es considerado por la bibliografía internacional como tortura y prisión política. Inclusive el hostigamiento posterior a su detención, ejecutados por agentes del Estado; respecto del lugar de privación de libertad, explica que desde el momento de su detención, pasa a un calabozo de la Primera Comisaría, y posteriormente a la ex Cárcel Pública de Punta Arenas, sin recordar el tiempo exacto de detención, pero aproximadamente corresponde a un mes. Lo anterior le consta debido al proceso de evaluación que se ejecutó, que se sustenta en una metodología para determinar las secuelas psicológicas, físicas y morales, que supone el ser víctima de prisión política y tortura. Esta metodología, validada por el Derecho Internacional, conocida como el Protocolo de Estambul, a lo que se suma la revisión del informe Valech.



Al punto de prueba N°2, manifiesta que tal como se explicita en el informe, posterior a la detención, se activa una sintomatología de carácter post traumático, que ha acompañado al evaluado hasta la actualidad.

Repreguntado al respecto aclara que la sintomatología a la que se refiere es variada en sus expresiones, deviene de fondo ansiógeno y encuentran expresiones de distinto tipo: Personalidad ansiosa, alteraciones del sueño, presencia de pesadillas, flash back, alteraciones del ánimo, aislamiento emocional, dificultades vinculares, y además se asocia una tendencia marcada a la evitación de contextos sociales que repercuten en su posibilidad de desarrollo económico y laboral. Por tanto la sintomatología descrita afecta las diversas áreas de la experiencia vital del sujeto evaluado. Esto es intrasíquico, social, relacional, emocional, laboral y familiar.

Al punto de prueba N°3 estima que la existencia está acreditada en el informe detallado en la respuesta anterior. La naturaleza de los perjuicios, también se explica en el informe y respuesta anterior, siendo el daño de una naturaleza integral del sujeto evaluado, es decir que afecta todas las esferas de su experiencia vital, además de ser prolongado en el tiempo. Respecto del monto y la cuantificación, no le corresponde pronunciarse, pero en lo personal, cree que no hay dinero que pague eso, debido a la naturaleza profunda del daño, que para ser reparado requiere de esfuerzos variados, desde clínicos hasta financieros, además del reconocimiento por parte del Estado.

Repreguntado al respecto, exhibiéndole el documento acompañado en folio 32 correspondiente al "Informe de daño, a consecuencia de prisión política, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", respecto de don José Luis Pacheco, de fecha 8 de octubre de 2021; lo reconoce y declara que quienes figuran suscribiendo dicho documento es él, como Sicólogo del Programa Prais Magallanes, y el doctor Juan Vukusic, siquiatria del Programa Prais; acto seguido ratifica el contenido y las conclusiones de dicho informe, explica que la metodología utilizada para evaluar al demandante fue el Protocolo de Estambul, a través de entrevistas sicológicas individuales, entrevista siquiátrica, revisión bibliográfica y de antecedentes, y discusión y análisis clínicos entre los evaluadores. Finalmente aclara que el Protocolo de Estambul es una metodología que se origina por especialistas, médicos y sicólogos, con el fin de poder



consignar, informar y reparar las graves secuelas originadas a los sobrevivientes a prisión política y tortura. Metodología que se desarrolla en el extranjero, pero tiene una amplia utilización en todo el mundo, y en todos los países que adscriben a los esfuerzos internacionales, para la eliminación de toda forma de tortura.

Añade que tiene la profesión psicólogo, egresado el año 2009, ejerciendo hasta la fecha de manera ininterrumpida; y en el programa Prais, es decir Clínica Reparatoria en Derechos Humanos, desde el 2017.

24. En el folio 75 declara el testigo Jun Felipe Vukusich Covacic, quien juramentado, al punto de prueba N°1 expresa que le consta porque en la evaluación que hizo, se constatan los hechos que el Sr. Pacheco recuerda y relata, y lo más objetivo por el informe Valech. Sostiene que él realizó la evaluación al demandante, por eso le consta.

Repreguntado al respecto, al exhibirle al testigo el documento acompañado el 15 de octubre del año en curso, individualizado en folio 32, correspondiente al Informe de daño a consecuencia de prisión política, tortura y otros tratos crueles y/o degradantes, manifiesta que corresponde a la evaluación que hizo mención en su declaración previa, aclarando que dicho informe lo realizó en conjunto con el psicólogo Alejandro Valle. Además, ratifica su contenido en su totalidad, añadiendo que la metodología utilizada para evaluar al demandante, desde el punto de vista clínico, son entrevistas estructuradas, que van permitiendo establecer la autenticidad y confiabilidad de los datos entregados en la entrevista y los efectos emocionales que aún puedan producir. Se aplicó el Protocolo de Estambul, en forma parcial, por parte del psicólogo, y se confirma que él está dentro del grupo de personas acreditadas de haber sufrido prisión política y tortura, acreditados por el informe Vaiech.

Al punto de prueba N°2, estima que que la confiabilidad del relato y el contexto que se vivía en esos años en el país, dejan claridad sobre que el daño sufrido, y que se mantiene en el tiempo, fue producto de la situación de detención y tortura, como uno de los hechos anamnésicos más relevantes de su vida.

Repreguntado al respecto aclara que es siquiatra, terapeuta familiar, y ha trabajado en el tema de Derechos Humanos, desde el año 1984 a la actualidad, siendo el coordinador del trabajo del Prais, Programa de atención y reparación en salud, que es un programa del Ministerio de Salud. Ha participado en múltiples



seminarios, capacitaciones nacionales e internacionales. Podría decir que lamentablemente se está transformando en un experto en un tema nunca debió haber sido necesario.

Al punto de prueba N°3, expresa que no sabe montos, pero cree que habría que establecer los criterios de lo que ha sido la compensación económica, de otras personas que sufrieron la misma situación. La principal reparación que aún no se ha logrado completamente en el país, es el reconocimiento de los hechos, pero la situación traumática vivida, su mantención en un largo período, deja secuelas emocionales, un trastorno permanente de la personalidad que se hace muy difícil de reparar, por la desesperanza y la desconfianza en los organismos del Estado, que en vez de proteger a las víctimas, fueron esos mismos agentes quienes produjeron el daño.

La **parte demandada** no acompañó a estos autos antecedentes alguno ni medios probatorios.

**Tercero:** Con el mérito de la prueba rendida en la causa, valorada legalmente, los siguientes hechos se tienen por acreditados en la causa:

a) En 1984, en la época en que ocurrió el llamado "Puntarenazo" se detuvo a José Luis Pacheco, sufriendo hacinamiento, con tortura tanto físicas como psicológicas, permaneciendo privado de libertad 20 días, aproximadamente, tanto en la Primera Comisaría de Carabineros de esta ciudad como en la ex Cárcel Pública, ambas ubicadas en calle Waldo Seguel de esta ciudad. Una vez recuperada su libertad, se allanó su domicilio, amenazándolo a él como a su familia.

Al día de hoy, al ver a un uniformado, rememora los recuerdos de lo vivido, afectándole.

Lo anterior se tiene por acreditado conforme los medios de prueba N° 20, 21 y 22 del considerando anterior.

b) "La Comisión ha reconocido la condición de víctima de prisión por razones políticas y de tortura a través de un proceso colegiado de evaluación de los antecedentes de cada caso en particular, dirigido a la identificación de elementos de juicio objetivos, que permitieran formarse convicción moral sobre dicha condición. / Cada caso y cada detención fue objeto de un riguroso proceso de análisis que comprendió la validación de la información proporcionada por los



declarantes por medio de investigación documental, antecedentes provenientes de organismos públicos, referencias de organismos de derechos humanos, de organizaciones de víctimas, información de testigos calificados, investigaciones en bases de datos disponibles y, en un número significativo de casos, mediante una segunda entrevista a la víctima o a testigos” (Página 73).

“La nómina incluye a todas las personas respecto de las cuales la Comisión ha alcanzado convicción moral del hecho de haber sido detenidas por razones políticas, sin considerar el tiempo que duró su privación de libertad. Así, se han comprendido aquellos casos en que la detención duró desde días hasta aquellos en que duró varios años. En promedio, las personas estuvieron privadas de libertad por 180,1 días. La comprobación de que las consecuencias de la prisión política y de la tortura no ha dependido necesariamente de su duración, sino más bien de sus características propias, como el tipo de recinto de reclusión, las condiciones de la prisión o la intensidad y métodos de tortura, ha determinado que en esta lista no se distinga por la duración de la prisión. Consecuentemente, el tiempo de prisión no ha sido considerado para las medidas de reparación propuestas” (Páginas 73 y 74).

“Todo esto permite concluir que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas. Y en esto contó con el apoyo, explícito algunas veces y casi siempre implícito, del único Poder del Estado que no fue parte integrante de ese régimen: la judicatura” (Página 178).

“durante todo el régimen militar, la tortura se constituyó en una práctica habitual -si bien con grados de selectividad distintos, dependiendo del período- por parte de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. Tal como se ha establecido en pasajes anteriores de este Informe, se torturó en forma sistemática para obtener información y gobernar por el miedo, inculcando el temor profunda y duraderamente en las víctimas inmediatas y, a través de ellas, en todos quienes tomaban conocimiento directo o indirecto del uso de la tortura. Cabe insistir en el hecho de que más del 94% de los casos reconocidos por esta Comisión señalaron que, en el transcurso de la prisión política, sufrieron torturas. En general, las



víctimas fueron sometidas a distintos métodos, cuyo uso alternado agravaba su impacto” (Página 225).

“Las características de estas detenciones causaron un gran impacto en los afectados y en quienes presenciaron estas situaciones. El maltrato verbal a personas desarmadas fue un hecho generalizado. El despliegue desproporcionado de fuerza producía una profunda sensación de indefensión, de vulnerabilidad, desamparo e incertidumbre por tales actos” (Página 493).

“En todo el país, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura recibió testimonios de personas que relataban lo que les sucedió cuando fueron detenidas por agentes del Estado y fueron acusadas de delitos políticos, entre 1973 y 1990. Para la mayoría habían pasado casi treinta años, pero el dolor, la humillación y el miedo ante las brutalidades padecidas aún no se habían extinguido. Tampoco la angustia por haber presenciado el sufrimiento de personas queridas o de otros seres humanos sometidos, como ellos mismos, a las peores atrocidades. Para otros, la evocación de lo sucedido décadas atrás implicaba exponerse al dolor y la vergüenza. Por estas razones, a muchos les costó tomar la decisión de declarar ante la Comisión. Casi todos consideraban que la prisión y la tortura habían tenido efectos devastadores en sus vidas. A los trastornos de su salud física y mental se sumaba la perturbación de sus relaciones sociales, afectivas y sexuales, que llegó a deteriorar, a menudo, los vínculos con sus familiares y sus parejas, lo que había causado, en muchos casos, rupturas insalvables” (Página 495).

“Para la mayoría de las víctimas que fueron objeto de represión, el primer impacto fue descubrir que la agresión, la tortura y el riesgo de muerte provenían de los agentes del Estado” / “Un segundo aspecto fue la indefensión y el desamparo ante el poder armado y coactivo del Estado (...)” / “Las torturas se aplicaban casi siempre, en lugares donde el detenido se encontraba incomunicado o en recintos secretos de detención, sin límites de tiempo ni restricciones en los procedimientos, y sin que las autoridades reconocieran esas prácticas, pese a que ellas eran empleadas a escala nacional por agentes del Estado o personas a su servicio” / “La inminencia de la muerte produjo el colapso de las estructuras defensivas normales y la angustia se apoderó de los detenidos de manera permanente. De ahí que éstos reiteren el hecho de haber quedado traumatizados” (Página 497)



“La tortura operó como una herramienta de control político mediante el sufrimiento. Independientemente de la participación directa o indirecta en hechos que pudieran ser constitutivos de delito, la tortura fue un recurso del poder durante todo el período del régimen militar. Buscaba amedrentar, someter, obtener información, destruir su capacidad de resistencia moral, física, psicológica y política para oponerse al régimen gobernante” (Página 498).

“En 1984, a raíz de las protestas nacionales y de movilizaciones sociales de oposición al régimen militar, desde el puntarenazo realizado en la Plaza de Armas de Punta Arenas en una visita del general Pinochet, se registró un alza importante de detenciones, especialmente de dirigentes políticos y sociales opositores. Ellos, luego de permanecer en recintos de Carabineros y de Investigaciones, fueron sometidos a procesos y recluidos en la cárcel de Punta Arenas” (página 499).

La Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, “fue utilizada con fines de reclusión política en distintos períodos entre septiembre del año 1973 y 1989. Concentró la mayor cantidad de detenidos en 1973 y luego en 1984, a propósito de las movilizaciones masivas en Punta Arenas, desde el puntarenazo. En los primeros meses, los detenidos, hombres y mujeres, fueron encerrados en celdas, hacinados, sin acceso a baño, expuestos a la humedad y al frío permanente. En el gimnasio del recinto, con los ojos vendados eran sometidos a interrogatorios y torturas por personal militar. Los detenidos en el año 1984 fueron fichados y fotografiados en la comisaría por funcionarios de la CNI. Los testimonios también señalan que los sacaban en la madrugada, con los ojos vendados, hasta la fiscalía militar para ser sometidos a interrogatorios y torturas” (páginas 503 y 504).

La ex Cárcel Pública de esta ciudad “Existió una concentración mayor de prisioneros en 1974, luego de realizados los consejos de guerra; y en el año 1984, cuando se realizaron masivas manifestaciones públicas en Punta Arenas, conocidas como el puntarenazo. Los presos políticos estaban separados del resto de la población penal. Consta de los testimonios que, en los primeros años, estuvieron en condiciones de hacinamiento en celdas pequeñas” (página 506).

Todas estas aseveraciones se extraen de los medios de prueba N° 14 a 18 del considerando segundo de este documento.





c) El demandante fue reconocido como víctima de detención por razones políticas, particularmente al demandante tiene el N° 17.891, conforme a los medios de prueba N° 14 y siguiente del considerando anterior.

d) A causa de la detención sufrida por el demandante, “se activó una sintomatología de carácter post traumático” que ha acompañado al actor hasta nuestros días, deviniendo en personalidad ansiosa, alteraciones del sueño, presencia de pesadillas, flash back, alteraciones del ánimo, aislamiento emocional, con evitación de contexto sociales, conforme a los medios de prueba N° 1, 23 y 24 del considerando anterior, ya que quienes elaboraron el informe acompañado, lo reconocieron en juicio.

**Cuarto:** Primeramente y respecto del fondo del asunto, es necesario explicitar que el artículo 1 inciso 4° de la Constitución Política de la República declara que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”, idea que se reitera en el artículo 3 de la Ley N° 18.575.

La carta fundamental, en el mismo artículo, mandata que “Es deber del Estado (...) dar protección a la población (...)”

Por otra parte, el inciso 2° del artículo 5 de Constitución, explica que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Entre los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, está la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a los Estados parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” (artículo 2), derechos y libertades descritas en el artículo 1 del mismo instrumento. Además, el artículo 5.2 del instrumento internacional, explicita que “Derecho a la Integridad



Personal. 2 Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. El artículo 63.1 del instrumento citado anteriormente, dispone que “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

El Convenio de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos y Enfermos de los Ejércitos en Campaña (Parte III), en su artículo 131, como la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, en su artículo 27, impiden que los Estados invoquen el derecho interno para eximirse de las responsabilidades en materia de derechos humanos.

El artículo 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República dispone una regla de competencia al describir que “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.

El artículo 4 de la Ley N° 18.575 explicita una acción general de responsabilidad del Estado, puntualizando en el artículo 42 de la misma Ley, la responsabilidad del Estado por falta de servicio.

**Quinto:** Por ende, es a la persona humana a quien debe respetársele los derechos esenciales que emanan de su naturaleza, garantizarle su pleno y libre ejercicio y, en caso que ellos sean violentados, debe repararse el daño en su integridad, sin que el Estado, so pretexto de alcanzar el bien común, deje de respetar aquéllos ni invoque el Derecho interno para eximirse de su responsabilidad en caso de habérseles atropellado.

**Sexto:** El primer hecho a probar en la causa, conforme a la resolución de 13 de agosto de 2020, folio 16, consiste en “Efectividad de que el demandante sufrió violación a sus derechos humanos, privación de libertad y tortura por razones políticas, por parte de agentes del Estado de Chile, durante el período



comprendido entre los años 1973 y 1990. Hechos y circunstancias que lo constituyen”, circunstancia que se demostró tanto por los hechos acreditados del considerando tercero de la presente sentencia, como el tenor del escrito de contestación de la demanda en esta causa (folio 7) en el que el demandado no discute el fondo de los hechos fundantes del libelo. Además, conforme al hecho acreditado letra b) del considerando tercero de esta sentencia, mediante el Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, establecida por Decreto Supremo N° 1040 de 2003 del Ministerio del Interior, existe un reconocimiento gubernamental respecto de la ocurrencia de los hechos en el modo que se describe en la demanda.

**Séptimo:** Se debe dejar establecido en esta sentencia que la actuación de los agentes del Estado, descrita en el considerando anterior, como en la letra a) del considerando tercero, constituyó una *falta de servicio*.

En efecto, la más general de las condiciones de responsabilidad de la Administración y de las municipalidades está definida genéricamente, sin mayores precisiones, como falta de servicio (Ley de bases, artículo 42; Ley de municipalidades, artículo 137).

El estatuto de responsabilidad de la Administración vigente en Chile se ha construido sobre la base del modelo francés de responsabilidad del Estado, donde la jurisprudencia ha concebido la falta de servicio como la infracción a un deber objetivo de conducta, que es análogo al concepto civil de culpa. Ambas nociones suponen un juicio objetivo de reproche sobre la base de un patrón de conducta: mientras en la culpa civil se compara la conducta efectiva del agente con el estándar abstracto de conducta debida en nuestras relaciones recíprocas, en la falta de servicio tal comparación se efectúa entre la gestión efectiva del servicio y un estándar legal o razonable de cumplimiento de la función pública. En ambos existe una gran proximidad entre estos enfoques, ya que ambos atienden al comportamiento que la víctima tiene legítimamente derecho a esperar, aunque en un caso se tenga en consideración el hecho negligente de un agente privado (culpa civil) y, en el otro, el funcionamiento impropio de un órgano de la Administración Pública (falta de servicio). De esta forma, el deber de servicio resulta de la ley.



La normalidad del servicio tiene que ver con expectativas normativas de la comunidad: no se refiere a aquello que uno quisiera como servicio eficiente (que es un estándar que tiende al infinito y que daría lugar a responsabilidad estricta u objetiva en sentido propio), sino a aquello que se tiene derecho a esperar<sup>1</sup>.

En efecto, conforme al hecho asentado letra b) del considerando tercero de esta sentencia, se califica como falta de servicio la actuación de los agentes del Estado desde que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas.

**Octavo:** El segundo hecho que se ordenó acreditar en la resolución de 13 de agosto de 2020, folio 16, consiste en “Efectividad que los actos imputados al demandado irrogaron perjuicios al demandante”, para ello se tiene presente el hecho acreditado letra d) del considerando tercero de esta sentencia, desde que la violación a los derechos humanos del demandante le irrogó perjuicios en distintos ámbitos de la vida, los que incluso, continúan a nuestros días, lo anterior refrendado con el reconocimiento de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conforme al hecho acreditado letra c) del considerando tercero de esta sentencia. En tal aspecto, se destaca que la inminencia de la muerte produjo el colapso de las estructuras defensivas normales; la angustia se apoderó de los detenidos de manera permanente, lo que genera el hecho de haber quedado traumatizados. Se añade por dicha Comisión que recibió testimonios de personas que relataban lo que les sucedió cuando fueron detenidas por agentes del Estado y fueron acusadas de delitos políticos entre 1973 y 1990. Para la mayoría habían pasado casi treinta años, pero el dolor, la humillación y el miedo ante las brutalidades padecidas aún no se habían extinguido, ni la angustia por haber presenciado el sufrimiento de personas queridas o de otros seres humanos sometidos, como ellos mismos, a las peores atrocidades. Para otros, la evocación de lo sucedido décadas atrás implicaba exponerse al dolor y la vergüenza. Casi todos consideraban que la prisión y la tortura habían tenido efectos devastadores en sus vidas. A los trastornos de su salud física y mental se sumaba la

<sup>1</sup> Extraído de Barros Bourie, Enrique; *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 2014. Página 506 y siguientes.



perturbación de sus relaciones sociales, afectivas y sexuales, que llegó a deteriorar, a menudo, los vínculos con sus familiares y sus parejas, lo que había causado, en muchos casos, rupturas insalvables.

**Noveno:** El tercer hecho materia de prueba, descrito en la resolución de 13 de agosto de 2020, folio 16, estriba en “Existencia, naturaleza y monto de los perjuicios que se reclaman”, considerándose que el demandante solicitó resarcir el daño moral sufrido por los hechos acreditados con anterioridad.

Es necesario explicitar que una de las definiciones que se ha dado al daño moral es que *se trata de bienes que tienen en común el carecer de significación patrimonial*<sup>2</sup>. Otra definición es *la lesión a los intereses extra patrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene de persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio*<sup>3</sup>.

Sin embargo, en rigor, *sólo las lesiones a bienes de la personalidad constituyen un daño propiamente moral (entendido como concerniente al fuero interno o al respeto humano); no lo son, por el contrario, el dolor corporal, la angustia psicológica o la pérdida de oportunidades para disfrutar de una buena vida, que, sin embargo, se entienden inequívocamente pertenecientes a esa categoría*<sup>4</sup>.

En este punto, valga expresar que se concuerda con el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en cuanto a que la comprobación de que las consecuencias de la prisión política y de la tortura no ha dependido necesariamente de su duración, sino más bien de sus características propias, como el tipo de recinto de reclusión, las condiciones de la prisión o la intensidad y métodos de tortura, ha determinado que en esa lista no se distinga por la duración de la prisión. Consecuentemente, el tiempo de prisión no ha sido considerado para las medidas de reparación propuestas, como se dejó asentado en el hecho acreditado letra b) del considerando tercero de esta sentencia.

**Décimo:** Relativo al quantum indemnizatorio, se ha indicado como criterio de determinación el de la *equidad, aceptado como regla de valoración del daño*

<sup>2</sup> Barros Bourie, Enrique; *Op. Cit.*; Pág. 232.

<sup>3</sup> Díez Schwerter, José Luis; *El Daño Extracontractual, Jurisprudencia y Doctrina*; Editorial Jurídica de Chile; Santiago, 1997; Página 88.

<sup>4</sup> Barros Bourie, Enrique; *Op. Cit.*; Pág. 287.



*moral por códigos recientes*<sup>5</sup>; sin embargo, se reconoce que en nuestro país se entrega a la discreción y prudencia del juzgador esta materia.

Se tiene en mente que la función de la reparación del daño moral *es más bien compensatoria: la víctima recibe una indemnización que no pretende restablecer el estado de cosas anterior al daño, sino cumplir la función más modesta de permitirle ciertas ventajas, que satisfagan su pretensión legítima de justicia y la compensen por el mal recibido*<sup>6</sup>.

De esta forma, "la reparación pecuniaria es siempre una compensación que no persigue borrar el perjuicio, cosa imposible, sino procurar, con la atribución de una determinada cantidad de dinero, las satisfacciones que la víctima o acreedor estimen del caso"<sup>7</sup>, por lo que la reparación es un esfuerzo que el derecho hace por otorgar la mejor compensación posible, sin que se garantice hacer desaparecer el daño. El principio que impera en este punto es la reparación integral del daño, según el cual todo daño debe ser reparado y en toda su extensión, por lo que debe tener por objeto poner al demandante en la misma situación en que se encontraría si no hubiese sido víctima del daño causado por el hecho del demandado<sup>8</sup>.

Prudencialmente, conforme a los hechos acreditados en la presente sentencia en el considerando tercero, la circunstancia acreditada que la víctima fue apresada y torturada, cuyo hostigamiento continuó una vez recuperada la libertad, por agentes del Estado en un período determinado de nuestra historia reciente, en el marco de una política de Estado represiva, las secuelas que dichas circunstancias le ha provocado al actor duran hasta el día de hoy, se fija el monto a indemnizar en la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos).

**Décimo primero:** El cuarto hecho materia de prueba en la resolución de folio 16 de 13 de agosto de 2020, fue "Efectividad de que el daño que reclama el demandante fue indemnizado con anterioridad a la presentación de la demanda. En su caso, forma y cuantía de dicha indemnización".

De esta forma, acreditada que sea la obligación de indemnizar por parte del Fisco de Chile al demandante, como se explicitó con anterioridad, se procederá a

<sup>5</sup> Barros Bourie, Enrique; *Op. Cit.*; Pág. 312.

<sup>6</sup> IDEM; Pág. 302.

<sup>7</sup> Domínguez H., Carmen. Contenido del Principio de Reparación Integral del daño; Algunas consecuencias, en especial para el daño moral. Inserto en Domínguez H., Carmen (Editora); *El Principio de Reparación Integral en sus Contornos Actuales*. Editorial Legal Publishing. Santiago, 2019.. Pág. 109-110.

<sup>8</sup> IDEM. Pág. 115.



analizar este punto, desde que se alegó –en el fondo- una forma de extinguir las obligaciones, consagrada en el artículo 1567 N° 1 del Código Civil, a saber, la solución o pago efectivo, al invocarse el pago de la indemnización con anterioridad.

Cabe destacar que no se incorporó medio de prueba respecto a los eventuales beneficios económicos que recibiera el demandante conforme a Ley N° 19.992, como expone el demandante en su libelo.

La Ley N° 19.123 creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, cuyo objetivo es la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (artículo 1). Debe, además, promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en dicha ley (artículo 2 N°1). Se estableció una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política (artículo 17) y serán causantes de dicha pensión de reparación las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política (artículo 18). Por último, dicha pensión de reparación es compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al beneficiario respectivo (artículo 24).

La Ley N° 19.234 establece beneficios en materia previsional respecto de los exonerados políticos. Sin embargo, el artículo 16 de la Ley expresa que las pensiones descritas en los artículos 6 y 15 de dicha Ley es incompatible con cualquier tipo de pensión proveniente de regímenes previsionales.

La Ley N° 19.992 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (artículo 1). Esta pensión es incompatible con aquellas otorgadas en las leyes N°s 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento (artículo 2 inciso 2°). La pensión





otorgada –sin perjuicio de lo dicho anteriormente– es compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario y con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes (artículo 4).

De lo dicho se desprende que la Ley N° 19.123 tiene por objeto promover la reparación del daño moral a las víctimas que expresa, promoción que no implica necesariamente reparación satisfactoria, lo que explica la compatibilidad entre ésta y con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al beneficiario respectivo. En virtud de lo anterior, se dictó la Ley N° 19.234, la que tiene por objeto entregar beneficios previsionales a las personas exoneradas políticas, estableciendo sólo una incompatibilidad respecto de beneficios de pensiones, objeto específico de la ley. Por último, la Ley N° 19.992 siguió con la idea de la compatibilidad entre el beneficio entregado con cualquiera otro, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario y con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.

La Excma. Corte Suprema de Justicia ha expresado que la mentada incompatibilidad alegada no existe, desde que el Estado tiene un régimen de pensiones asistenciales, sin acreditarse que éstas tiene por objeto satisfacer la merma moral que invocan los demandantes<sup>9</sup>, *criterio jurisprudencial prevaleciente actualmente a nivel interno, acerca del carácter complementario y no excluyente de reparaciones otorgadas en vías administrativa y judicial, es razonable en relación con el derecho de víctimas de graves violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia para solicitar una declaratoria judicial de responsabilidad estatal, ya sea para que se efectúe una determinación individual de daños o, en su caso, para cuestionar la suficiencia o efectividad de reparaciones recibidas con anterioridad*<sup>10</sup>, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por todo lo dicho con anterioridad, se descartará la alegación del Fisco de Chile, en cuanto a haberse extinguido la obligación mediante el pago.

**Décimo segundo:** La defensa fiscal invocó la prescripción extintiva prevista en el artículo 2332 del Código Civil (4 años), contados desde la

<sup>9</sup> Sentencia de Excma. Corte Suprema de Justicia recaída en el rol ingreso N° 2289-2015, específicamente en su considerando décimo tercero.

<sup>10</sup> Párrafo 100 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile de 29 de noviembre de 2018.



restauración de la democracia (en el supuesto que se entienda suspendida el término de la prescripción en la dictadura militar por imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes). En subsidio, esgrimió la prescripción extintiva ordinaria contemplada en el artículo 2515 del Código Civil (5 años), lo que se condice con el hecho materia de prueba “Efectividad de que la acción impetrada se encuentra prescrita”, que constituye otra forma de extinción de las obligaciones (artículo 1567 N° 10 del Código Civil).

La Excma. Corte Suprema de Justicia, conociendo de la materia, ha negado la aplicación de este instituto en caso de violaciones a los Derechos Humanos<sup>11</sup>. Particularmente, el máximo tribunal ha expresado que *en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios en las que los jueces del fondo erróneamente asilan su decisión, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de ius cogens, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional que ha debido ser reconocido por los jueces de la instancia al resolver la demanda intentada*<sup>12</sup>. Así, *pesa sobre el Estado la obligación de reparar a los familiares de la víctima consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno*<sup>13</sup>.

Es menester destacar que, incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que *en la medida en que los hechos que dieron origen a las acciones civiles de reparación de daños han sido calificados como crímenes contra la humanidad, tales acciones no deberían ser objeto de prescripción*<sup>14</sup>. Apreciación que avalada por el Estado chileno, desde que *comparte el criterio de*

<sup>11</sup> Sentencia de casación de la Excma. Corte Suprema de Justicia recaída en el rol ingreso N° 31605-2018, específicamente en su considerando Cuarto y las demás sentencias citadas en aquél.

<sup>12</sup> IDEM, párrafo final del considerando Quinto.

<sup>13</sup> IDEM, considerando Séptimo.

<sup>14</sup> Párrafo 89 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile de 29 de noviembre de 2018.



*que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción y que no puede excusarse en el mero paso del tiempo (fundamento de la prescripción) para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo 1973-1990, lo que incluye su arista indemnizatoria<sup>15</sup>. Situación planteada en la sentencia que se aplica en la especie, desde que las acciones indemnizatorias intentadas por las víctimas en el caso que se cita de la sentencia de la Corte Interamericana decía relación con demandas civiles sin que estuvieran aparejadas con algún proceso penal; de tal forma que la Corte entiende que los fundamentos del Estado para considerar imprescriptibles las acciones civiles de reparaciones por daños ocasionados en hechos calificados o calificables como crímenes contra la humanidad, con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema, son aplicables a cualquier acción civil, independientemente de si ésta es resarcitoria en el marco de un proceso penal o si es una demanda en la vía civil propiamente dicha. Es decir, tal imprescriptibilidad se justifica en la obligación del Estado de reparar por la naturaleza de los hechos y no depende por ello del tipo de acción judicial que busque hacerla valer<sup>16</sup>.*

Por todo lo explicitado con anterioridad, se hace imperativo rechazar la excepción de prescripción hecha valer por el demandado, desde que el *Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del (propio) Estado<sup>17</sup> y por cuanto de acuerdo al contexto en que los hechos se desarrollaron, con la intervención de agentes del Estado, amparados bajo un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de constatar la extinción, por el transcurso del tiempo, del probable ejercicio de la acción civil resarcitoria derivada de ellos<sup>18</sup>.*

**Décimo tercero:** Respecto a la alegación subsidiaria de tener en consideración los pagos recibidos por los actores por parte del Estado y la debida

<sup>15</sup> IDEM, párrafo 92.

<sup>16</sup> IDEM, párrafo 95.

<sup>17</sup> ECS, considerando Quinto de la sentencia de casación recaída en el Rol ingreso N° 31605-18.

<sup>18</sup> ECS, considerando Octavo de la sentencia recaída en Rol ingreso N° 2289-15.



armonía con los montos establecidos por los Tribunales, se tiene en mente los montos por concepto de indemnizaciones señalados en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2018, específicamente su párrafo 121, desde que se citó sentencias por las partes que –en términos generales- la indemnización por resarcimiento de daño moral oscila entre \$30.000.000 y \$150.000.000, conforme el estudio presentado por el Fisco de Chile, y entre \$100.000.000 y \$130.000.000, conforme las sentencias invocadas por el representante de los demandantes.

**Décimo cuarto:** En cuanto a la solicitud de reajustes e intereses, se accederá a aplicar intereses desde el momento que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada, conforme lo establecido en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, entendiendo que el reajuste tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de una suma determinada, asumiendo que la indemnización debe ser completa, se aplicará el reajuste desde que la presente se encuentra ejecutoriada. El reajuste e interés, por cierto, correrá hasta el pago efectivo.

Respecto a la entidad de los intereses, ellos serán los corrientes y si el demandado incurre en mora de pago, conforme al inciso primero del artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, correrán a partir de ese plazo el interés máximo legal.

**Décimo quinto:** En este punto, no se puede soslayar lo aseverado en el considerando décimo segundo de este documento, en cuanto a que conforme a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las acciones civiles de reparación de daños calificados como crímenes contra la humanidad, tales acciones no deberían ser objeto de prescripción, apreciación que conforme lo aseverado por dicha Corte, es compartida por el Estado de Chile, ya que no podría excusarse del mero paso del tiempo para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales de "*investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo 1973-1990, lo que incluye su arista indemnizatoria*"<sup>19</sup>.

De esta forma, salta a la vista la incompatibilidad de la alegación ventilada por el Estado de Chile en estrados internacionales con lo obrado en esta causa,

<sup>19</sup> Párrafo 92 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile de 29 de noviembre de 2018.



desde que de acogerse la alegación de prescripción de la acción reparatoria civil a consecuencia de crímenes de lesa humanidad como se esgrimió en autos (ya sea por responsabilidad extracontractual u ordinaria), se estaría incurriendo en responsabilidad internacional, comprometiendo responsabilidad estatal.

**Décimo sexto:** La demás prueba no analizada explícitamente en los considerandos anteriores no es idónea para la resolución de la controversia, desde que ella no es atingente respecto de los hechos materia de acreditación.

**Décimo séptimo:** Conforme a todo lo explicitado con anterioridad, deberá acogerse la demanda intentada en los términos que se dirán a continuación.

Teniendo presente lo dispuesto en los artículos 1, 5, 6, 7, 19 N° 1 y 26 de la Constitución Política de la República; 4 y 42 de la Ley N° 18.575; 2332, 2497, 2514 y 2515 del Código Civil; 160, 161, 170, 253 y siguientes, 384, 432, 433, y 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Tratados Internacionales descritos en el presente documento; y auto acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 30 de septiembre de 1920, sobre la forma de las sentencias, se declara que:

**I.- Se rechaza la excepción de prescripción extintiva** interpuesta en la contestación de la demanda de 23 de julio de 2020, folio 7, conforme a lo razonado en el cuerpo de la presente sentencia;

**II.- Se acoge la demanda** deducida en folio 1 por Juan José Arcos Srdanovic en representación convencional de José Luis Pacheco Cisternas, **condenándose** al demandado Fisco de Chile, **a título de indemnización de perjuicios por daño moral** irrogado al actor, **a pagar al demandante la suma de \$100.000.000** (cien millones de pesos);

**III.- La suma antes indicada se reajustará** conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada y la de su pago efectivo, **más los intereses** corrientes para operaciones de crédito de dinero que se generen en el mismo período, conforme lo señalado en el considerando décimo cuarto de esta sentencia;

**IV.- Se condena en costas** al demandado por haber resultado totalmente vencido, conforme al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

Anótese, regístrese, notifíquese y consúltese si no se apelaré.

**Rol C-952-2020.**



Dictada por don Javier A. Toledo Vildósola, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. En Punta Arenas, a 10 de febrero de 2022.

